



UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRIA EN DERECHO

**Medición de la lesión del grave daño al Ecosistema y la
Comisión de Delitos Ambientales, casos judicializados
en Juzgados Penales de Chiclayo, año 2012-2015**

Tesis

presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho con
Mención en Ciencias Penales

Autor:

Bach. Gonzalez Morales, Jaime David

Asesor:

Mg. Yzquierdo Hernández Leopoldo

Lambayeque, 2018

Medición de la lesión del grave daño al ecosistema y la comisión de delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo, año 2012-2015.



Bach. Jaime David González Morales
Autor




Mg. Leopoldo Izquierdo Hernández
Asesor

Presentada a la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de **MAESTRO EN DERECHO** con mención en **CIENCIAS PENALES**


APROBADO POR



Dr. José María Balcázar Zelada
Presidente



Dr. Freddy Hernández Rengifo
Secretario



Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero
Vocal

Acta de sustentación (copia)

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

113

Siendo las 4:00 PM horas del día MAÑES 30 de ENERO del año Dos Mil dieciocho, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado, designados mediante Resolución N° 053-2017-EPG de fecha 16 DE ENERO DE 2017, conformado por:

DR. JOSÉ MARIA BALCAZAR PELADA PRESIDENTE (A)
DR. FREDDY HERNANDEZ RANGFO SECRETARIO (A)
DR. VICTOR RUPERTO ANACETO GUERRERO VOCAL
Mg. RONOLDO QUIVEDO HERNANDEZ ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada MEDICIÓN DE LA LESIÓN DEL GRABE DAÑO AL ECOSISTEMA Y LA COMISIÓN DE DELITOS AMBIENTALES, CASOS JUDICIALIZADOS EN JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑO 2012-2015.

presentado por el (la) tesista JAIME DAVID GONZALEZ MORALES, sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 0164-2018-EPG de fecha 26 DE ENERO DE 2018.

El Presidente del Jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 82 puntos que equivale al calificativo de MUY BUENO.

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.

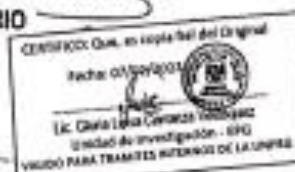
Siendo las 5:15 PM horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

ASESOR




OBSERVACIÓN: EL NOMBRE CORRECTO DEL TESISISTA ES:
JAIME DAVID GONZALEZ MORALES

Declaración jurada de originalidad

Yo, Jaime David González Morales, investigador principal, y Mg. Leopoldo Izquierdo Hernández, Asesor del trabajo de investigación **“Medición de la lesión del grave daño al ecosistema y la comisión de delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo, año 2012-2015”**. declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.



Bach. Jaime David González Morales
Autor



Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández
DNI: 16667328
ASESOR

Lambayeque, del 2022.

Dedicatoria

Le dedico el resultado de este trabajo a mi esposa Milagritos, por su paciencia y comprensión. Debo pedirle perdón porque ha sufrido el impacto directo de las consecuencias del trabajo realizado, honestamente, ella me ayuda a alcanzar el equilibrio que me permite dar todo mi potencial. Nunca dejaré de estar agradecido por esto.

Asimismo, a María Cristina, mi amada hija, sin duda ella es lo mejor que me ha pasado en esta vida, es mi mayor alegría y motivación, que sin su ayuda no hubiese logrado terminar este trabajo de investigación.

Agradecimiento

A la Virgen de Guadalupe por ser mi guía y
confidente, agradecerte por todas las veces que has
estado allí cuando te he necesitado, tu presencia en mi
vida es algo que valoro día a día con honor y gloria
por siempre.

Índice General

| | |
|--|-------|
| | |
| Acta de sustentación (copia) | III |
| Declaración jurada de originalidad | IV |
| <i>Dedicatoria</i> | V |
| <i>Agradecimiento</i> | VI |
| Índice General | VII |
| Resumen | X |
| Abstract | XI |
| Introducción | 12 |
| CAPITULO I | 16 |
| ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO | 16 |
| 1.1. Surgimiento del problema..... | 16 |
| 1.2. El Problema | 19 |
| 1.2.1. Formulación del problema..... | 20 |
| 1.2.2. Justificación..... | 20 |
| 1.2.3. Objetivos | 21 |
| Objetivo General | 21 |
| Objetivos específicos..... | 22 |
| 1.3. Aspectos metodológicos..... | 22 |
| 1.3.1. Formulación de hipótesis | 22 |
| 1.3.2. Variables e Indicadores | 23 |
| 1.4. Marco Metodológico | 24 |
| 1.4.1. Diseño de contrastación de la hipótesis | 24 |
| 1.4.2. Población y muestra..... | 24 |
| 1.4.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. | 25 |
| 1.4.4. Métodos y procedimientos para recolección de datos: | 26 |
| CAPÍTULO II | 27 |
| MARCO TEÓRICO | 27 |
| 2.1. El desarrollo sostenible..... | 27 |
| 2.1.1. Estocolmo 1972 | 27 |
| 2.1.2. El Informe Brundtland | 29 |
| 2.1.3. Río de Janeiro | 31 |
| 2.1.4. Johannesburgo 2002 | 34 |

| | |
|---|-----|
| 2.2. El Principio del desarrollo sostenible | 35 |
| 2.3. Daño Ecológico y daño ambiental | 37 |
| 2.4. Derecho Ambiental en el Perú | 39 |
| 2.5. Daño ambiental | 47 |
| 2.6. Modalidades del daño contra el medio ambiente | 55 |
| 2.7. Daño ambiental en el Perú | 56 |
| 1° Degradación Ambiental | 59 |
| 2° Depredación ambiental | 61 |
| 3° Contaminación ambiental | 62 |
| 4° La contaminación atmosférica: énfasis en la contaminación del aire | 65 |
| 5° Contaminación de las aguas | 66 |
| 6° Contaminación del suelo | 69 |
| 7° Otros tipos de contaminación: | 70 |
| 2.8. Características y tipos de daño | 73 |
| a) Incertidumbre | 73 |
| b) Carácter difuso y expansivo del daño ambiental | 75 |
| c) Daño concentrado y daño diseminado | 75 |
| d) Daño continuado, permanente o progresivo | 76 |
| e) Daño biofísico y daño social. | 76 |
| 2.9. Los delitos ambientales | 80 |
| 2.10. El bien jurídico en los delitos contra el medio ambiente | 91 |
| 2.11. Elementos constitutivos del delito contra el medio ambiente | 100 |
| CAPÍTULO III | 104 |
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS | 104 |
| 3.1. Presentación de los resultados | 104 |
| 3.2. Verificación de la Hipótesis | 111 |
| 3.3. Propuesta Legislativa como consecuencia de la realización del presente trabajo de investigación: | 113 |
| 3.3.1. Base filosófica | 113 |
| 3.3.2. Base constitucional | 114 |
| 3.3.3. Propuesta penal | 118 |
| CONCLUSIONES | 121 |
| RECOMENDACIONES | 123 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 124 |
| Constancia de originalidad | 129 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Informe final de tesis..... | 130 |
| Recibo digital..... | 134 |

Resumen

El presente trabajo, busca establecer supuestos que permitan determinar el daño ocasionado en el ecosistema como producto de una acción ilícita. Es decir, plasmar desde un punto de vista legal aquello que deberá considerarse como un grave daño ambiental mismo que amerite una condena penal. Pues, se cree que el derecho ambiental resulta ser una rama decorativa y hasta un buen pretexto para justificar el cumplimiento de políticas y convenios internacionales que se han suscritos.

Pero para llegar a establecer dichos supuestos es necesario conocer aquellos convenios y/o reuniones internacionales, que marcaron un hito en la historia en cuanto a esta rama corresponde, pues tenemos: 1) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, llevada en 1972, en Estocolmo, Suecia. 2) La Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, Rio de Janeiro, Brasil. 3) La Cumbre de la tierra en Johannesburgo, en 2002, entre otras. Una vez expuesto esto, así como explicar los conceptos básicos, de daño ambiental, daño ecológico, medio ambiente, degradación ambiental, contaminación ambiental y demás conceptos, para ser contrastados con el aspecto jurídico penal de algunos delitos tipificados.

Finalmente, se analizó los casos judicializados entre el 2012 – 2017, mismos que demuestran una mayor incidencia en los delitos de tráfico de productos forestales maderables, identificando que pocas veces se logra dar con el propietario de los productos forestales, siempre quedan comprometidos choferes y terceros.

En rasgos generales, estos es lo que se ha plasmado en la presente investigación.

Palabras claves : desarrollo sostenible, daño ambiental, degradación, depredación, bien jurídico, contaminación, principios.

Abstract

The present work seeks to establish assumptions that allow determining the damage caused to the ecosystem as a result of an illegal action. That is to say, to establish from a legal point of view what should be considered as a serious environmental damage that deserves a criminal conviction. It is believed that environmental law turns out to be a decorative branch and even a good pretext to justify compliance with international policies and conventions that have been signed.

But in order to establish these assumptions, it is necessary to know those international conventions and/or meetings that marked a milestone in the history of this branch: 1) The United Nations Conference on the Human Environment, held in 1972, in Stockholm, Sweden. 2) The Earth Summit on Environment and Development, in 1992, Rio de Janeiro, Brazil. 3) The Earth Summit in Johannesburg, in 2002, among others. Once this is explained, as well as explaining the basic concepts of environmental damage, ecological damage, environmental, environmental degradation, environmental pollution and other concepts, to be contrasted with the criminal legal aspect of some typified crimes.

Finally, we analyzed the cases prosecuted between 2012 and 2017, which show a higher incidence of trafficking in timber forest products, identifying that the owner of the forest products is rarely found, and that drivers and third parties are always involved.

In general terms, this is what has been reflected in the present research.

Keywords: sustainable development, environmental damage, degradation, predation, legal good, pollution, principles.

Introducción

Cuando se piensa que los ciudadanos como parte de una sociedad organizada deben cumplir deberes, pocas veces nos imaginamos que dicha obligación abarca también la de cumplir con preservar el medio ambiente, y si lo entendiéramos entonces jamás imaginaríamos observar como las personas arrojan basura a las calles, causan ruidos molestos, tienen en cautiverio especies protegidas, etc.

Y esto es así por cuanto, si de repente imagináramos el daño que los comportamientos descritos causan al medio ambiente, con seguridad que nos abstuviéramos de contribuir con la degradación del planeta, y el equilibrio ecológico sería menos desgarrador de lo que ahora sucede, por lo que en estas últimas décadas el derecho ha asumido la tarea de tutelar directamente el bien jurídico medio ambiente, y en especial, combatir los comportamientos que sin resultar evidentes, terminan afectando el tanpreciado equilibrio ecológico.

Estas, entre otras fueron las motivaciones que originaron la realización del presente trabajo, titulado: Medición de la lesión del grave daño al ecosistema y la comisión de delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo, año 2012 – 2015, por cuanto nos preocupaba establecer la forma como en las sentencias penales se llega a determinar el daño causado al medio ambiente, pero sobre todo la forma cómo el derecho penal procura reparar el bien jurídico contra el que se ha atentado.

Por lo que resulta pertinente plantearse como problema del presente estudio: de qué manera se determina la lesión del grave daño producido al ecosistema, como consecuencia de la

comisión de los delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo año 2012-2015

En aras de responder a nuestra cuestión planteada se prosiguió a determinar los supuestos legales que permitan a los operadores de justicia delimitar el daño que se produce al medio ambiente, y para conseguir esto se buscó establecer los procedimientos que en los casos de los delitos contra el medio ambiente, los jueces penales ponen en juego a fin de determinar el grave perjuicio establecido con el accionar del agente, pero sobre cómo desde el derecho penal se puede contribuir a la reparación del daño que se ocasionó y que hay la necesidad de revertir.

Luego de realizar el análisis correspondiente de las sentencias penales condenatorias, pues las mismas constituyeron la muestra de estudio, y en la que al final de este trabajo se pudo establecer que en efecto no queda claro en todas ellas ni los instrumentos con los que se determina el daño ocasionado, ni mucho menos queda establecido la magnitud del perjuicio originado, limitándose a establecer que el mismo resulta ser grave.

No se debe olvidar que el derecho penal ha concurrido también para tipificar comportamientos que causan perjuicio ostensible al medio ambiente, y el Libro Especial del Código Penal peruano se han tipificado una serie de conducta que van desde la protección al medio ambiente hasta la tutela a las flora y fauna, tan diversa en el país, pero a la vez tan cerca a la extinción precisamente por la acción de personas inescrupulosas que anteponen intereses económicos de siempre.

En ese orden de ideas, hemos estructurado este estudio en apartados y aspectos, conforme lo mostramos, así tenemos que en el capítulo primero vemos lo concerniente a los criterios de metodología como son la realidad problemática, el problema, la justificación e importancia, la propuesta de objetivos, la formulación de la hipótesis y la fijación de las variables, para luego manifestar los aspectos relacionados con las técnicas de investigación usadas.

Tenemos un capítulo segundo referidos a definiciones importantes del derecho ambiental como el desarrollo sostenible, las reuniones internacionales, los acuerdos en los que incluso nuestro país es miembro, para empezar a adentrarnos al contenido de la afectación del medioambiente ante el perjuicio ecosistémico, para culminar refiriéndonos a como se viene tratando el tema ambiental en el Perú, entre otros puntos.

.

Un tercer capítulo, se efectúa una explicación sobre el daño ambiental enfocado desde el punto de vista de la ley y de la doctrina, se enfoca las modalidades de dicho daño, se menciona también el tema referido a las clases de perjuicio ambiental, poniéndose énfasis en lo que cada una de estas formas de alterar el medio ambiente supone.

En el cuarto capítulo se desarrolla una descripción sobre los delitos ambientales, si bien es cierto no hacemos una exposición sobre cada uno de los artículos que forman parte del Título III, lo cierto es que ponemos énfasis en los lineamientos generales, y en la forma como cada uno de ellos se puede manifestar de manera sustancial.

Un quinto apartado, indagamos temas puntuales sobre sentencias condenatorias

estudiadas, con énfasis, principalmente, en la constatación de la hipótesis, y posteriormente decidir a elaborar la propuesta que es un componente principal del porqué de este estudio científico.

Siendo así, es que cumplo con presentar, ante los Señores Miembros del Jurado, el presente trabajo a efectos de que se proceda a su evaluación y de este modo lograr la meta propuesta: obtener el Grado de Maestro en Derecho, con mención en Ciencias Penales.

EL AUTOR

CAPITULO I

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Surgimiento del problema

Desde siempre se ha pensado que el avance y el desarrollo de la tecnología, trae consigo una serie de problemas que afectan directamente el equilibrio ecológico y aparecen entonces cambios directos en el clima, desaparición de algunas estaciones, descongelamiento de glaciares, desaparición de extensas áreas verdes con vegetación natural, contaminación de los ríos, aparición de nuevas estaciones tropicales, entre otras manifestaciones en las que se advierte un cambio de las formas naturales de vida que afectan directamente las relaciones con el medio ambiente que debemos tener todas las personas.

Pero estos hechos que de por sí son graves, se ven alentados muchas veces por el excesivo afán de querer ganar dinero en menor tiempo y con el menor esfuerzo, es por ello que la protección al medio ambiente sucumbe ante la actuación de funcionarios públicos que irresponsable expiden permisos para la tala indiscriminada de bosques, la realización de actividades extractivas, la comercialización de especies en vía de desaparición, etc., en los que poco o casi nada importa a cambio de autorizaciones fraudulentas para depredar formalmente los recursos naturales de la tierra.

A pesar de las leyes que se han expedido y de los esfuerzos de muchas organizaciones no gubernamentales, y el actuar honesto de algunos personajes públicos, dañar el medio ambiente deviene en una actividad lucrativa más aún si lo que importa es generar actividades

que originen ganancias directas y que favorezcan el comercio entre el propio estado, empresas y particulares, muchas veces bajo el pretexto de la libertad de empresa, el crecimiento sostenido, la inclusión social.

Por ello desde el mundo de derecho corresponde establecer si es que el elemento normativo que busca proteger el equilibrio ecológico del sistema realmente funciona o si es efectivo para establecer una conducta como ilícita y perniciosa contra el medio ambiente.

Si el derecho deviene en permisivo, con seguridad que no ha de servir de mucho un conjunto de normas que no es capaz de sancionar con claridad los comportamientos que vulneran el sistema ecológico, razón por la que empezamos este estudio a fin de establecer si es que la norma protectora del medio ambiente deviene en viable, tutelar y sobre todo si facilita que conductas indebidas sean perseguidas y sancionadas como en efecto debe ocurrir.

En el campo del derecho penal, también se ha asumido prescribir aquellas conductas que el legislador ha considerado como punibles y en esto, se han aprobado una serie de normas que configuran en el Código Penal delitos que buscan proteger el equilibrio ecológico, de tal manera que tutelando la flora y fauna de nuestro país, se pretende perseguir las conductas que han sido catalogadas como las que afectan más al medio ambiente, es decir, producen más daño y originan consecuencias funestas.

Sin embargo, mi preocupación permanente ha sido cómo es que se llega a establecer que precisamente existen conductas que son punibles y que afectan el equilibrio ecológico.

En otras palabras, cómo es que, dentro de un proceso penal, se llega a establecer que se ha dañado el medio ambiente y que se ha cometido ilícito penal.

El propósito de estudio en la presente investigación, estriba en que mediante el estudio teórico se va a establecer algunos supuestos que permitan determinar el daño como consecuencia del delito ecológico, el daño en los delitos de mera actividad, estableciendo elementos que permitan medir dicha afectación. Asimismo, se va a analizar sentencias judiciales en las que se ha emitido sentencia condenatoria a fin de apreciar de manera objetiva cómo es que se ha arribado a una sentencia

Debe quedar claro que este problema con relación a los desequilibrios ocasionados contra el medio ambiente y que ocurren también en nuestro distrito judicial. por cuanto la Región Lambayeque es rica en biodiversidad, y muchas especies de flora y fauna resultan ser especies protegidas, alcanzando esta protección, por ejemplo, al algarrobo que resulta ser un producto muy apetecido por aquellos traficantes de carbón, entre otros aspectos.

1.2. El Problema

Lo expuesto nos llevó a plantearnos entonces que el problema que se pretendió dar respuesta está referido a establecer supuestos que permitan determinar el daño ocasionado en el ecosistema como producto de una acción ilícita, de tal forma que se pretende establecer cuáles son los supuestos de medición desde el punto de vista legal que habrán de determinar que estamos frente a un grave daño que amerita una condena penal, en la medida en la que tratándose de delitos contra el medio ambiente atentan con el equilibrio ecológico.

Siendo el daño ecológico imperceptible e inmedible conforme a los instrumentos tradicionales con los que contamos, consideramos que, en un proceso penal con las garantías, pero sobre porque se va a sustentar una sentencia condenatoria, sí se debe establecer la magnitud del problema ocasionado, pues, sobre esto, se fundamentará una condena.

Esto precisamente nos llevó a realizar el presente estudio, fundamentalmente para establecer cómo en las resoluciones condenatorias expedidas por el órgano Jurisdiccional (Juzgado en lo Penal de Chiclayo), se viene valorando a nivel probatorio, los elementos que contribuyan a identificar el daño ocasionado, por lo que el problema queda expresado de la manera siguiente.

1.2.1. Formulación del problema

Es así, que el problema en el presente estudio quedó establecido de la siguiente manera:

¿De qué manera se puede medir la lesión del grave daño producido al ecosistema, como consecuencia de la comisión de los delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo años 2012-2015?

1.2.2. Justificación

La investigación que pretendemos iniciar se justifica en la medida en la que muchas se cree que el derecho ambiental resulta ser uno decorativo y hasta un buen pretexto para justificar el cumplimiento de políticas y convenios internacionales que se han suscrito. Sin embargo, hoy más que antes entendemos que ser responsable en el cuidado del equilibrio ecológico es una tarea más que imperiosa, porque con ello nos jugamos incluso la propia existencia del ser humano.

Por ello resulta necesario establecer cómo es que desde el ámbito del derecho penal se ha previsto reprimir las conductas en las que se altera el medio ambiente, pero sobre todo resulta urgente determinar cómo es que se mide la afectación causada al ecosistema, y de qué manera este aspecto le permite al juez penal establecer, evaluar y medir el grave perjuicio al medioambiente, pues de la revisión de los procesos se advierte que nuestros jueces para declarar la procedencia

de una imputación contra un agresor del sistema ecológico, han de reparar en la calificación que les ofrezca el perito.

La importancia del presente trabajo se origina en la necesidad de verificar que el elemento normativo cumpla realmente su finalidad de la pena, y que el sujeto al que se la ha impuesto una condena sepa que la sanción que le corresponde es como producto de un severo daño ocasionado al medioambiente, pues en este caso resulta de singular interés determinar la forma cómo se ha lesionado el bien jurídico tutelado, y luego al imponer una pena el sentenciado asuma la responsabilidad de su conducta, de tal manera que el derecho penal ambiental cumpla también su función represora pero también preventiva.

1.2.3. Objetivos

Objetivo General

Establecer supuestos legales para medir la lesión del grave daño producido al ecosistema, como consecuencia de la comisión de los delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo años 2012-2015

Objetivos específicos

- Precisar que se debe entender por grave daño al sistema ecológico, considerado en los delitos ambientales.
- Determinar las características de tipificación, antijuricidad y culpabilidad presentan los delitos ambientales en el Código Penal Peruano.
- Analizar los criterios utilizados para determinar el grave daño ecológico en los procesos por delito ambiental, casos de los juzgados penales entre el año 2012-2016
- Proponer los supuestos que deberán considerarse para determinar procesalmente el grave daño en el delito ecológico.

1.3. Aspectos metodológicos

1.3.1. Formulación de hipótesis

Esta investigación contó con la siguiente hipótesis positiva:

Si se establecen supuestos legales para medir la lesión del grave daño producido al ecosistema, entonces se podrá determinar la relevancia de la comisión de los delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo años 2012-2015

1.3.2. Variables e Indicadores

Variable independiente

Supuestos legales para medir la lesión del grave daño producido al ecosistema

Indicadores

- Principio de legalidad
- Principio de lesividad
- Afectación cuantitativa
- Afectación cualitativa
- Instrumento para la medición
- Valoración jurídico - penal

Variable dependiente

Comisión de los delitos ambientales

- Contra la flora
- Contra la fauna
- Contra el ecosistema

1.4. Marco Metodológico

1.4.1. Diseño de contrastación de la hipótesis

Estudio Explorativo

Estudio Descriptivo

Estudio Explicativo

Se aplicarán los siguientes Métodos de Investigación: método de observación, método de análisis, y método de síntesis

1.4.2. Población y muestra

La población está formada por el total de los expedientes judiciales en los que se emitió sentencia condenatoria entre los años 2012-2015, seleccionándose un total de veinte casos penales, siendo los criterios de selección los siguientes:

- Años 2012 - 2015
- Procesos con sentencias condenatorias
- Azar simple

Se precisa que la muestra con la que se trabajó a la vez constituyó nuestra población, por cuanto se trabajó con la totalidad de casos resueltos en el período comprendido en la delimitación del problema, por lo que queda formada conforme al siguiente cuadro:

**CUADRO N° 01: MUESTRA A LA QUE SE VA APLICAR LA FICHA DE ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS**

| Aspectos carpetas fiscales | Frecuencia | Porcentaje |
|---|-------------------|-------------------|
| 2012 | 5 | 25% |
| 2013 | 5 | 25% |
| 2014 | 5 | 25% |
| 2015 | 5 | 25% |
| TOTAL | 20 | 25% |

Año: 2016

Fuente: De investigación

1.4.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

- LOS MATERIALES fueron de carácter bibliográfico y corresponden a autores nacionales como extranjeros.
- LAS FUENTES consultadas pertenecieron a la especialidad que corresponde el tema materia de investigación.
- LA TECNICA empleada es la dogmática jurídica.
- En lo que respecta a la RECOLECCION DE INFORMACION DE COMPILACION DE DATOS fue necesario el empleo de fuentes de información tales como la observación de la problemática generada en torno a las sentencias que se han expedido en el que se ha condenado en segunda instancia.

1.4.4. Métodos y procedimientos para recolección de datos:

a) Método de Análisis

El presente método fue empleado por cuanto se ha iniciado el trabajo por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad., habiéndose establecido una relación de causa efecto entre los elementos que componen el objeto materia de investigación.

b) Método Explicativo:

Explicar las consecuencias que podrían darse debido a la limitación de derechos fundamentales que se originarían a partir de la aplicación de la condena del absuelto.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. El desarrollo sostenible

Conforme lo señala el profesor San Martín Villaverde, existen importantes acontecimientos a lo largo de la historia del Derecho Ambiental y la necesidad de cuidar al ambiente por las afectaciones a éste y que son realizadas por el ser humano y por las empresas, en mayor proporción (SAN MARTÍN VILLAVERDE, D., 2015).

Pero el derecho a las personas que a su vez marca las pautas del deber de los estados de tutelar el medioambiente, lo hallamos a través de importantes reuniones, como

2.1.1. Estocolmo 1972

Entre el 5 al 16 de junio del año 1972, en Suecia-Estocolmo, se trató el tema sobre el Medio Humano, la misma que fue desarrollado en la Conferencia de las Naciones.

Indica San Martín que representantes de todo el mundo entusiasmados en la idea que se podría modificar la forma de pensar del ser humano sobre cómo proteger nuestro entorno y que estos guías actúen como los primordiales propulsores del desarrollo sustentable e incluso de ostentar un pensamiento proactivo y de vigilancia ambiental, en base a ideales homogéneos que brinden a las comunidades del orbe motivación y directriz para conservar y enriquecer a la persona humana, redactaron la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Considera que las conclusiones más relevantes a los que se arribó son:

La Declaración de Estocolmo proclama, que "el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente" (DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO, 1972)

En la Constitución de 1979, se reconoció lo estipulado en la mencionada Declaración:

"Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza.

Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental".

Empero, el entorno del hombre, es precisamente, lo que lo hace desarrollarse y ser uno mismo, acoplando sus actividades a un escenario elemental, que es el ambiente.

Por otro lado, se tiene "la protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos" (DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO, 1972).

Finalmente, resaltar lo que en el Convenio de Estocolmo toma como temas fundamentales la afectación del ecosistema: "En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo"

Como razones observables que adquieren un protagonismo importante del menoscabo de la biósfera, resalta la explotación demográfica. Ante el incremento de personas, superior será el incremento en la urgencia del usar las riquezas naturales de nuestro ecosistema.

De acuerdo al Principio 1 del Convenio de Estocolmo: El hombre posee como derechos fundamentales, además de la libertad e igualdad, el disfrute de un ambiente saludable para tener una vida digna, dentro de un medio de calidad tal que le permita gozar de bienestar, por lo que tiene la formal obligación de preservar y cuidar el medio para las presentes y futuras generaciones.

Ante ello, nuestra Carta Magna, en su artículo 2.22, establece similar óptica (CARTA MAGNA DEL PERÚ, 1993), al indicar que el contexto denominado ecosistema, acoge al ser humano y su entorno (naturaleza); asimismo, es el pilar fundamental del vínculo entre hombre y medio ambiente.

2.1.2. El Informe Brundtland

La intranquilidad por no evidenciar superiores progresos en las posturas vertidas en el Convenio de Estocolmo y las ya señaladas en el argumento precedente, condujo en el año 1987 a elaboración de la CMMAD-Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas: CMMAD.

La institución antes aludida fue conducida por la Dra. Gro Harlem Brundtland (BRUNDTLAND, Harlem, 1998). Los beneficios de los trabajos de este grupo de trabajo se ven reflejados en un informe de enorme transcendencia, en razón de que desliga y coteja diferente número de contextos conflictivos sobre el atentado contra el hábitat en que nos desarrollamos. Es así, la referida narración adoptó en un principio la denominación de "Nuestro Futuro Común", sin embargo, es afamado a nivel mundial como el Informe Brundtland.

Esta profunda investigación y estudio del contexto socioeconómico del orbe el que ofreció la CMMAD ligado con diversos expertos. En 1987, se emitió, finalmente, el trabajo mejor construido hasta aquel instante sobre el progreso del ambiente.

En efecto, el aporte esencial que dio este informe fue la elaboración y explicación de una definición que sería el argumento fundamental para adoptar una conciencia de las acciones y/o actividades que realizamos en forma cotidiana; pues, en términos globales, puntualiza el deber de tutelar y preservarlo.

Ante tales circunstancias, aparece la denominación desarrollo sustentable o también llamado sostenible, definido éste por dicha Comisión como: "El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades" (SAN MARTÍN VILLAYERDE, D., 1995).

2.1.3. Río de Janeiro

Durante el mes de junio en los días del 3 al 14 del año 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, se realizó la "Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo", en cual participaron "172 gobiernos, entre ellos 108 jefes de Estado o de Gobierno. Unos 2,400 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) atendieron, junto a 17,000 personas, en el Foro de ONG que se convocó de manera paralela".

Según Germán Vera, el tema de mayor transcendencia de la Cumbre de la Tierra, fue el acogimiento de instrumentos internacionales, en número de cinco, que mayor han resaltado, tales como:

- La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
- El Programa o Agenda.
- La Declaración sobre Bosques o Declaración sin fuerza jurídica obligatoria de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.
- La Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
- La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Siendo así, resulta pertinente dar un alcance sobre el contexto que llevó a este solemne evento mundial.

Es conveniente señalar que anterior a Río de Janeiro 1992 ocurrieron otros hechos, muy resaltantes. Es así que, en Irlanda, específicamente en Dublín, durante los días del 26 al 31 de enero del año 1992 se realizó la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA); y que, como consecuencia de este acontecimiento apareció la Declaración sobre Agua y Desarrollo Sostenible

Del mismo modo, el Banco Mundial emitió el Informe sobre el Desarrollo Mundial para el año 1992; aclarando que esta institución se ha vislumbrado por ser el más importante eje promotor con el desarrollo sostenible con la biodiversidad, al desarrollar y construir un análisis en base a un estudio sobre el contexto real del planeta, en un lapso de tiempo anual.

Resulta necesario tener presente al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, quien se reunió por primera vez, con fecha doce de abril de mil novecientos noventa y uno, en La Haya, siendo lo significativo de este suceso el anuncio de la participación activa de las personas jurídicas en tema ambientales y su accionar en la actividad laboral, cambiando el rumbo; visto el desarrollo y el medio ambiente desde una óptica diferente (SAN MARTÍN VILLAYERDE, 2015).

Es así que llegamos a la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 cuya finalidad esencial fue plantear una alianza mundial.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se destacan

veintisiete principios; la cual es un "instrumento -que, aunque no es vinculante- sí fundamental para el progreso moderno del derecho internacional sobre el medio ambiente; convirtiéndose en la herramienta internacional necesaria y útil para todos aquellos que opten estudiar muy seriamente este rubro".

Pues bien, el Principio uno, señala: "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible...". Es por ello, que aseveramos: el hombre tiene el deber de la búsqueda del confort del ecosistema, cuanto más por el desarrollo de las actividades económicas que efectúa día a día.

Por ello, es transcendental el Precepto 21 (DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO, 1972), en razón a que hace referencia a la Máxima de Soberanía. Mismo que indica, "los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo...". Resaltando la función de carácter sustentable que le compete a un país independiente.

Asimismo, el Principio 3 del Convenio, relacionado con el tema del Desarrollo Sustentable, destacándose: "el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras". Ahora, comparemos con el Informe Brundtland, mencionado anteriormente, en lo que respecta al concepto de Desarrollo Sostenible; el supuesto resulta ser parecido, siendo esta diferencia lo que lo define como tal. En otras palabras, es la Declaración de Río de mil novecientos noventa y dos, contexto en

donde se introdujo la palabra en confrontación, conceptualizado y usado en un inicio en dicho Informe.

2.1.4. Johannesburgo 2002

La II Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable o la tal llamada, Segunda Cumbre de la Tierra, celebrada en Sudáfrica (Johannesburgo), realizada desde el 26.08 al 04.09.2002.

Dicha cumbre tenía varios propósitos, aunque la reducción de la pobreza era el objetivo principal. El otro compromiso fundamental estaba relacionado con la problemática del efecto invernadero a través de las políticas públicas y su relevancia, las mismas que fueron debatidas en el Protocolo de Kyoto, comprobando la eficacia en el desarrollo por parte de los países miembros, habiéndose considerado la temática siguiente:

- Disponibilidad del líquido elemento (agua).
- Poner en marcha efectivamente las Agendas o Programas 21.
- Producción agrícola.
- Conservación de la biodiversidad.
- Energías renovables.
- Salud.
- Entre otros.

La cumbre también conocida como Río +10, en virtud de la década que data desde la Declaración de Río de Janeiro, reunió gran cantidad de mandatarios y asistentes alrededor del mundo.

Temas como el acceso al agua fueron analizados y tocados con prudencia y preocupación, pues gozar del agua sería limitado para el 2015. Además, la pobreza, en especial en África, se erigió como uno de los problemas claves, uniéndose al terrorismo como las causas de afectación al ser humano.

La distribución responsable, adecuada y prioritaria de recursos fue el eje central también de esta cumbre, pero la guerra era un fenómeno latente, sobre todo por el movimiento militar que Estados Unidos de América ya desplegaba en el Medio Oriente, motivado por el ataque terrorista efectuado el 11 de septiembre de 2001.

2.2. El Principio del desarrollo sostenible

En 1987 se expidió el Informe Brundtland, éste definió al desarrollo sostenible como el "desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades" (DESARROLLO SOSTENIBLE, 2007).

Ahora, para conseguir la sustentabilidad nunca es un trabajo fácil, denota grandes sacrificios de las naciones y de su comunidad, principalmente, y que, ciertos actores, incluso,

consideran que la conservación del medio ambiente es inabordable.

Gabriel Real, "resulta irrefutable afirmar que la sostenibilidad es una utopía irrealizable si entendemos que supone mantener en su estado actual todos los sistemas naturales" (REAL, G., 2007).

Las circunstancias muestran a los elementos del ecosistema como algo importante para gozar de un ambiente saludable y digno; empero, es urgente reflexionar en este asunto, pues al “saquear” la totalidad de nuestros recursos para un tiempo cercano, no habrá propósitos válidos. Allí radica el conflicto, en la premura de nuestro ímpetu por explotar en forma rápida y desproporcionada nuestros ecosistemas, despojando de la tutela ambiental, que resulta ser el meollo de un desarrollo económico, pero de carácter sostenible; independientemente de la actividad que se realice se debe actuar con ética ambiental.

Empero, en la afectación al medioambiente, se aborda la disminución de bienes públicos del ecosistema, sin embargo, vista ésta desde este punto de vista tiene que ver con el que daña al patrimonio de los seres humanos (REAL, G., 2007).

2.3. Daño Ecológico y daño ambiental

¿Existe alguna diferencia entre daño ecológico y afectación medioambiental?

Ramón Martín Mateo señala que: "El daño ecológico se define, así como la interrupción o alteración de un servicio prestado por los activos naturales, lo que no debe conducir al rechazo general, en base a principios éticos, de todo intento de valoración económica de este daño" (MARTÍN MATEO, R., 2003).

Se debe reflexionar entre estos conceptos, que no resulta ser lo mismo.

Con respecto a la diferencia entre estas dos definiciones, Manuel Castañón del Valle, señala: Principalmente la afectación medioambiental tiene presupuestos, uno, patrimonial, el mismo que repercute en el patrimonio público o en su defecto privado de carácter real (tangibles); y el otro propiamente ecológico, el mismo que afecta a algo más sublime, más que patrimonial, es el contexto socioambiental en que nos desenvolvemos.

En consecuencia, el concepto de Castañón del Valle es valioso, el tema de la tangibilidad, como determinante en el quebrantamiento del contexto ecosistémico de una comunidad, resultando ser la definición más aceptada en nuestros días (SAN MARTÍN VILLAVARDE, D. 2015).

Por ello, traigamos a colación que la afectación al medioambiente es el producido a los bienes públicos, los que se sustentan en sistemas ecológicos básicos (MARTÍN MATEO, R., 2007), el que dañará, principalmente aun gran número de seres humanos.

En consecuencia, lo grave, se sustenta en la afectación a la biodiversidad y sus efectos en el planeta. Por ello, un incendio forestal, por ejemplo, los resultados sucederían bosques desbastados, sin vida, sistemas arbóreos quemados y la evasión más que segura de especies de fauna que albergaba el sector ocasionando un decrecimiento en la flora. Incluso, percibimos que el elemental efecto es: producción del efecto invernadero.

En efecto, la afectación al ecosistema está orientado mayormente a los perjuicios patrimoniales, en otras palabras, se puede comenzar con acciones de reparación de diversos tipos como, por ejemplo, económica. Es decir, es realizable la evaluación del perjuicio ambientales tal como estudiaremos más adelante.

La ecología y el medioambiente están relacionados, sin que ello signifique que sean conceptos iguales. Muy diferente es decir de Derecho Ecológico y Derecho Ambiental.

Derecho ecológico en donde se encuentran en el mismo nivel a la naturaleza y el ser humano; ese reciente aspecto normativo "permitirá el paso del Estado de Derecho al Estado ecológico de Derecho" (ROY VALENCIA, P. 2007).

María del Carmen Carmona Lara refiere: "El derecho medioambiental es una forma de abordar el estudio a través del cual se pretende dar solución a la existencia de una discrepancia en la relación sociedad-ambiente en gran parte y usando de ella sus argumentos principistas e institucionales (CARMONA LARA, M., 2001).

Ahora bien, Derecho Ecológico definido éste como el grupo de reglas legales que norman la vinculan entre ser humano y la naturaleza (demás seres vivos), debemos afirmar que el área de la ecología es grandemente extensión.

No obstante, en esta efímera justificación del marco legal de tales bizoñas materias podemos referir lo expresado por Carmona Lara quien hace referencia a Guillermo J. Cano: "no todos los problemas ambientales tienen origen en la ecología. Es decir, los temas ambientales tienen origen en la ecología y algo más".

2.4. Derecho Ambiental en el Perú

Constituye un derecho de cada uno de los ciudadanos a vivir un medio ambiente adecuado, saludable y equilibrado que favorezca el desenvolvimiento de la vida humana; siendo esta una obligación con el único objetivo de conservarlo; así se encuentra prescrito en el artículo 123° de la Carta Magna de 1979. Del mismo modo, en el apartado 2.2 de la Constitución de 1993, ha quedado establecido como un el derecho fundamental que goza toda persona a vivir dentro de un ecosistema equilibrado y adecuado que permita un desarrollo saludable para su vida. Mientras la Ley General del Ambiente señala, lo considera no solo como un derecho; sino, además como una obligación esencial que toda persona debe estar sujeta.

Régimen Patrimonial de los Recursos Naturales

Tal como lo señala la Ley de Leyes (Constitución Política del Perú), todos los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, en donde nuestro Estado peruano como país soberano tutela su aprovechamiento en forma sostenible; de modo que es el único que no sólo concede su uso ante terceros, otorgando permisos, concesiones, autorizaciones o licencias; sino que los fiscaliza y supervisa para que su utilización sea razonable y sustentable.

Derechos ambientales reconocidos en la Ley General del Ambiente

- Desarrollo Sostenible.
- Acceso a la información.
- Participación en la gestión Ambiental.
- Acceso a la justicia ambiental.

Desarrollo Sostenible

La utilización sustentable de las riquezas naturales, implica el favorecer y/o permitir a generaciones futuras hacer uso de los mismos. Nuestra Carta Magna, en sus arts. 67° y 68° refiere que el responsable no solo de administrar los recursos sino propiciar el empleo sostenible de los mismos, buscando con ello el desarrollo sustentable de la Amazonía.

Por su parte, la Ley General del Ambiente indica que es una facultad y una obligación garantizar el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales y el desarrollo sustentable de nuestra nación.

La participación como facultad y como obligación

Presencia de la intervención ciudadana y la aproximación a la información.

Es una obligación de la sociedad orientar nuestras actividades económicas por la preservación el ecosistema; así como su aprovechamiento sustentable de las riquezas naturales.

Asimismo, tiene la facultad de intervenir en la toma de posturas, en la gestión ambiental, en sus lineamientos políticos y derecho a la tutela jurisdiccional o administrativa.

Acceso a la justicia ambiental

El ser humano, dada su condición, posee la facultad a adoptar o entablar una acción efectiva, rápida y sencilla, así lo define, en su artículo IV del Título Preliminar de la LG A, referente a la Justicia Ambiental, ante cualquier ámbito, sea judicial o administrativo.

En tal sentido, se pueden realizar acciones de carácter legal incluso en asuntos en que se advierta una afectación en contra del accionante que denote un interés económico.

Por su parte, se habla de un interés difuso cuanto éste no esté relacionado directamente al accionante o su familia.

La LGA indica como preceptos ambientales:

- Sostenibilidad.
- Prevención.
- Precautorio.
- Internalización de costos.
- Responsabilidad ambiental.
- Equidad y gobernanza ambiental.

Acciones legales en defensa del ambiente:

Acciones Civiles Legitimidad para accionar.

-Salvo disposición contraria de la ley, por legítimo interés económico o moral, esto es, cuando se trata de intereses difusos (LGA).

- Según el artículo 1969 del Código Civil, la tal denominada Responsabilidad basada en la culpa; y por otro lado, lo normado en el artículo 1970 de la norma acotada, sobre la Responsabilidad basada en el riesgo, por el cual se causa un daño a otro como producto de una actividad riesgosa está en el deber de restituirlo o en su defecto repararlo.

Acciones legales en defensa del ambiente:

El artículo 963 del Código Civil, sobre las Civiles Limitaciones por acción de vecindad: nos habla de una indemnización por daños y perjuicios por el tema de la construcción de linderos; y de otra parte lo indicado por el artículo 1980 de la norma antes mencionada, sobre al cierre o retiro de la obra; cuando el propietario de un bien es responsable de la afectación causado al bien continuo por la caída de por la falta de mantenimiento o en su defecto conservación del mismo.

Acciones en defensa del ambiente ante la Administración Pública

El numeral 20° del artículo 2° artículo de nuestra Ley Fundamental, nos habla del Derecho de Petición, que tutela la facultad de la persona de entablar solicitudes, ya sea como miembro de una sociedad o como su conjunto (colectivamente), a través de un documento ante la autoridad respectiva, pues esta tiene el deber de ofrecer al peticionante un resultado inmediato por escrito, respetando los plazos establecidos por la norma, sujetos a una responsabilidad

funcional en caso contrario. Asimismo, existe el procedimiento de interponer el Recurso de Queja, esta es interpuesta por el peticionante cuando existe una negativa o no se le atiende vuestra petición, la cual se plantea al superior jerárquico para que este se pronuncie sobre el derecho incoado.

Acciones en defensa del ambiente ante la Administración Pública Procesos contenciosos administrativos.

- Resulta factible el comportamiento apelable de la función pública al trasgredir o reta un interés colectivo. Para tal efecto, se encuentran legitimados el Defensor del Pueblo, el Representante de la Fiscalía, los mismos que participan como partes procesales o en todo caso pueden ser una persona natural o jurídica, tal como lo establece la Ley N° 27584 (artículo 12°).

Acciones de Garantía en defensa del Ambiente

Del mismo modo, se tiene la Acción de Amparo de Amparo, la cual se sustenta en la defensa de aquellos derechos que se encuentran tutelados por nuestra constitución, los mismos que se encuentran vulnerados o en todo caso amenazados por un acto real por hacer o un dejar de hacer; sin embargo, para hacer uso de este acción constitucional se requiere se haya agotado las vías previas, con la excepción que se puede omitir este procedimiento cuando de su espera se convierta en irreparable la agresión; o en su defecto cuando se trate del medioambiente, para accionar no es obligatorio recurrir a las vías previas.

Acción de Cumplimiento n Cumplimiento, se puede definir como aquella acción que se interpone contra cualquier funcionario reacio al cumplimiento de algún aspecto contemplado

en la norma o cuyo accionar derive del campo administrativo, tal como se puede observar en el Caso La Oroya. Por su parte, la Acción de Habeas data, resulta pertinente en los casos en que los servidores públicos son reacios a dar datos, tal como se encuentra descrito en el Caso Southern sobre el derecho a la información.

Acción Popular, esta se presenta contra: normatividad de carácter administrativa, reglamentos, pronunciamientos y preceptos de índole global, sin importar la potestad que lo expida.

Acción de Inconstitucionalidad. – Se entabla contra: preceptos con categoría de ley: leyes, determinaciones de urgencia y legislativos, normas del Congreso, tratados, ordenanzas municipales y ordenanzas emitidas por los gobiernos regionales de carácter global.

Acciones penales en defensa del ambiente Delitos contra la seguridad pública.

- El art. 286° del CP, proscrib: la Contaminación del líquido elemento o sustancias que están dirigidas para el consumo humano; del mismo modo, la negociación de objetos nefastos o negativos, expresada en el artículo 288° de misma norma adjetiva sobre los Delitos contra la ecología.
- Asimismo, los Delitos contra los RRNN y el medio ambiente: Vertido ilegal de residuos, prescrito en el art. 304° del CP; también, estable en cuanto las licencias su Otorgamiento indebido (art. 306°); en el art. 307° sobre el Incumplimiento de normas sanitarias; Depredación de los recursos naturales (flora y fauna) tuteladas en el art. 308°; así como en el asunto de las especies acuáticas y su extracción de las mismas (art. 309° Código Penal).

- Del mismo modo, el tema sobre la Deforestación de Bosques proscritos en el art. 310° del CP; en esa misma línea, se tiene en cuanto a las tierras agrícolas y su uso indebido (art. 311°); así como aquellos planes o usos contrarios a los previstos por la ley (art. 312°), y la Alteración del ambiente o el paisaje, conducta delictiva prescrita en el artículo 313° de la norma antes mencionada.

Limitaciones para accionar penalmente en defensa del ambiente

Toda sociedad ha asimilado precaver la deposición ambiental refutando a las actividades de financiación, pues previo al EIA (Estudio de Impacto Ambiental) resulta necesario obtener un pronunciamiento del organismo correspondiente para ejercer su derecho a demandar en el proceso penal. Así tenemos que la ley veintiséis mil seiscientos treinta y uno, indicaba: se necesita del criterio argumentado del sector respectivo sobre el quebrantamiento a la normatividad ambiental previo a comenzar una demanda penal (La Ley General Ambiental ha hecho suya la presente) (https://www.earthrights.org/sites/default/files/documents/training-for-lawyers-7_0.pdf).

Daño y ambiente

Desde el punto de vista jurídico, se entiende por Daño, a todo detrimento, deterioro o quebrantamiento del contexto jurídico patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual tiene como efecto la limitación de un bien jurídico, y que evidentemente su preservación resulta necesaria mantener de no haber sucedido la afectación. En

consecuencia, no podemos hablar de una responsabilidad civil si no existe afectación alguna, en ese mismo sentido, podemos afirmar que no existe daño si es que no existe un agraviado (http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf)

En la actualidad el daño se clasifica en patrimonial y extrapatrimonial. De modo que, hablamos de un daño patrimonial cuando estos son corporales o incorporables (valoración económica); mientras que será extrapatrimonial o moral, cuando éste no conduce a una merma del patrimonio por reiterar en bienes fundamentales, mismos cuya valoración no es de un ángulo dinerario; sin embargo, cabe precisar que el resarcimiento pecuniario es la única forma de reparación, donde se incorporan las lesiones, los derechos fundamentales individuales o colectivos, así como el padecimiento e incomodidades como producto de tales perjuicios. Así tenemos, que por medioambiente debe comprenderse como a todos aquellos elementos, bióticos y abióticos que rodean al hombre, en otras palabras los llamados elementos geológicos (rocas y minerales); el sistema atmosférico (aire); hídrico (agua superficial y subterránea); el edafológico (suelos); los bióticos (organismos vivos); recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que dañan los seres humanos, ellos mismos y sus interrelaciones (REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO AMBIENTAL, 2005).

Así tenemos, en la actualidad, el criterio predominante (científico) ampara que el hábitat está constituido por el medio natural, el mismo que podemos definirlo como aquel grupo de elementos (bióticos o abióticos); del mismo modo, por el medio cultural, el mismo que requiere como eje principal la actividad que desarrolla el ser humano, tales como el paisaje,

las creaciones científicas, artísticas o tecnológicas, y el patrimonio cultural y arqueológico.

2.5. Daño ambiental

El daño ambiental resulta ser definido como un dejar de hacer o acción, sea una conducta o la ejecución de una acción por un individuo (físico / jurídico, público / privado), que modifique, deteriore, trastoque, merme o exponga a un inminente daño de carácter significativo, uno de sus elementos constitutivos de la definición del ecosistema, quebrantando el normal desarrollo de los hábitats naturales.

Por su parte, nuestra Junta Comunitaria se manifiesta sobre el deber ambiental que tenemos cada uno de los habitantes y su incidencia en la protección y reparo en las afectaciones ecosistémicas, la misma que define al daño como la ruta opuesta al beneficio que recibimos de nuestras riquezas que nos ofrece el medioambiente, el mismo que puede producirse en el contacto directo o en su defecto, indirectamente. (DIRECTIVA 2004/35/CE, Parlamento Europeo).

Por otra parte, dentro del contexto del derecho comparado podemos aludir a la LGA de Argentina que conceptualiza las palabras “daño ambiental”, al cambio notable que tiene como efecto un impacto negativo en la biodiversidad; esto es sus riquezas lo que nos conllevaría a la armonía de los hábitats, o los relacionados con lo patrimonial o extrapatrimonial (LGA- ARGENTINA, artículo 27).

Por su parte, el artículo segundo de la Ley de Bases Ambiental chilena establece que se debe comprender por afectación ambiental “...toda pérdida, disminución, detrimento, menoscabo significativo inferido al medio ambiente a uno o más de sus componentes”.

Empero, la legislación ambiental de Colombia, la definición de perjuicio o afectación ecológica, implica los momentos en donde se daña la marcha habitual ecosistémica o en su defecto el restableciendo de las riquezas y los elementos que lo componen.

Del mismo modo, se tiene la LOA de Costa Rica, misma que si bien, no nos da un mayor alcance de dichas palabras, considera el precepto global, que es considerado como delito desde un punto de vista comunitario, de modo que menoscaba sus cimientos de la permanencia de la comunidad; desde el ámbito de la economía, es contrario a los insumos y las riquezas necesarias para el movimiento productivo así como el cultural, en cuando ponga en riesgo el bienestar social, y deontológico desde un punto d vista ambiental, pues atenta o contraviene a la urgencia de vivir en un ambiente saludable que permita la perdurabilidad de las generaciones que vive en día a día y con quienes compartimos nuestro medioambiente (LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE ARGENTINA, artículo 2.e).

En el ámbito nacional, la LGA de nuestro país a conceptualizado al referirse a la afectación al medioambiente como al detrimento o menoscabo al ecosistema o sus elementos que lo conforman, las mismas que pueden suscitarse por actuar contrario o no a lo establecido

jurídicamente, provocando consecuencias nefastas en el presente o futuro. (LGA DE PERÚ, artículo 142).

Entonces podemos afirmar que el daño ambiental es todo acto u comportamiento, sea este de carácter omisivo, que transforme, deteriore, trastoque, merme o exponga en real riesgo uno de los componentes esenciales de la noción del contexto ecosistémico (GONZALES, R., 2001), o en su defecto el deterioro o trasgresión del bien de carácter o índole ambiental (bióticos / abióticos), del panorama natural como una forma figurada de expresar lo relacionado a nuestro hábitats, lo que incluye lo relacionado a nuestra existencia, bienestar, y elementos patrimoniales o extrapatrimoniales de las personas, se realizan y tienen un efecto, una inoculación que sobrepase los márgenes de recepción y peligro (BRICEÑO, M., 2004).

Al respecto debe precisarse que las conceptualizaciones sobre el daño ambiental mencionadas, no difieren con las posturas espirituales (el hombre es el centro de las cosas y su relación con el medio ambiente) y a una valoración intrínseca de las cosas, las misas que son tratadas por importantes tratadistas, siendo que para el primero de los mencionados, considera al daño como aquel perjuicio que es causado por la persona a su bienestar así como a las actividades económicas que desarrolla día a día; en tanto, el segundo aspecto, define a los daños como los realizados y ejecutados por el propio contexto natural sin incumbir los efectos ocasionados sobre los actos diarios que vinculan la relación hombre-naturaleza.

De esta manera, podemos hablar de la existencia de daño al medioambiente, cuando una acción u omisión o actividad económica ocasiona un cambio adverso al ecosistema o sus elementos. Las afectaciones al entorno ambiental están conceptualizadas de la siguiente manera a través de elementos como: manifestación, efectos, causas y agentes implicados. Elementos que hacen alusión al desenvolvimiento de sus componentes para su investigación de sus consecuencias ecosistémicas y socioeconómicas relacionadas a los perjuicios causados en nuestros hábitats (GÓMEZ – OREA, D., 1994).

En su mayoría, cuando hablamos de afectación o perjuicio al entorno; resulta ser una consecuencia sobre los comportamientos de los seres humanos que en forma directa o indirecta dañan o menoscaban el medio ambiente. Es por ello, cuando se habla de deterioro ambiental, esto se define como el quebranto o el agotamiento de los componentes del ecosistema, como lo son: la desertificación, la erradicación de las riquezas forestales desde una perspectiva carente de sustentabilidad en el tiempo, alteración del ambiente, cambio del curso de las aguas, incendios, avenamiento y atiborrado de hábitats marinos, incorporación de especímenes extraños, empleo inapropiado del área, etc.

En cuanto a la contaminación, la misma se define como la presencia en el medioambiente de contaminantes, en cantidades mayores y que permanecen en el tiempo que provocan en el ambiente efectos nocivos para la vida de los seres humanos, relacionados con su salud y consecuentemente su bienestar, así como a su biodiversidad, los mismos que alteran el ecosistema de las criaturas vivas, tales como los paisajes o riquezas naturales, agua, suelos,

aire, un deterioro importante.

También puede definirse el acto de contaminar como insertar elementos o componentes extraños al medioambiente en cantidades y permanencia que afecten el ambiente con el consecuente desmedro en sus elementos constitutivos; tales serían el provocar o realizar vertimiento de sustancias, materiales, gases, presencia de residuos sólidos en los recursos hídricos, contaminación sonora, lluvia atmosférica con químicos sobre un forestal; asimismo, insumos prohibidos o de efectos peligrosos para la salud del hombre y la biodiversidad, derrames y/o vertimientos de combustible al mar, emanación de ventosidades, todo estos provocan polución ambiental.

Doctrinariamente se ha establecido que la afectación ecosistémica, desde un concepto amplio, consiste en la destrucción de los componentes connaturales o culturales que forman parte del ambiente, realizados en forma individual o colectivo; en otras palabras, guarda relación con el deterioro ambiental, (BRICEÑO, M., 2004), conforme también se explicará en su oportunidad.

Asimismo, se alude a dos clases o modalidades de polución, por un lado, la que atenta contra los componentes de nuestro entorno medioambiental, y por otro, la que deteriora sus componentes que guardan vinculación con lo cultural. Así tenemos, con respecto a la primera clase, incluye a la afectación del aire, agua, suelo y subsuelo, el contexto paisajístico, acústico,

entre otros. Mientras que aquellas acciones que perjudican a los elementos de orden cultural se haya: belleza escénica, la disminución de las creaciones científicas, artísticas o de índole tecnológico o aquella que daña patrimonio cultural y arqueológico (MANAVELLA, C., 2000)

Por ende, la afectación del medioambiente puede ser realizado en forma casual, inusitada o inesperada, por la naturaleza en sí; sin embargo, la afectación, considerada como aquella acción jurídicamente recusable; la misma que se suscita de manera activa o en su defecto es aquel que es causado por una acción u omisión del ser humano que se orienta a menoscabar o perjudicar de manera negativa e importante para nuestro hábitat.

Este comportamiento activo u omisivo por parte del ser humano, puede ser propia decisión o de manera involuntaria, a través de una acción (dolo) o de un acto negligente (culpa), la misma que puede estar dentro del marco legal o en su defecto al margen de la esta; actuando por si, o por encargo de otro, ya sea persona privada o pública.

El daño ambiental o la acción que lo ejecuta puede ser individual o colectivo, ya sea desde la óptica del sujeto o sujetos activos y/o pasivos que lo realizan. De esta manera, el menoscabo a la biodiversidad es ocasionado tan solo por un individuo o de manera colectiva, lo que no permite en cierto modo poder deslindar responsabilidad en cada caso en concreto.

Asimismo, la afectación a nuestro entorno ecosistémico, no solo perjudica la armonía inherente a los distintos hábitats y el bienestar de la colectividad, en la mayoría de las oportunidades menoscaba las facultades o potestades que tiene toda persona, cuya individualización puede resultar ser fácil o difícil, en todo caso dependerá de la intensidad, tipo, gravedad de la afectación, deviniendo, principalmente, afectada la sociedad en general, lo que brinda a todos sus miembros una validez eficaz que favorezca el accionar en beneficio del medio ambiente, teniendo como único objetivo su protección bajo el amparo del interés difuso.

Cuando hablamos de un perjuicio o afectación al medioambiente, este resulta como efecto del comportamiento doloso o culposo tanto de particulares o privados, como del Estado y sus instituciones, la misma que es reflejada en el actuar a lo largo y ancho de nuestro territorio, a través de sus gobiernos regionales y locales. En ese mismo orden de ideas, se tiene que los funcionarios y servidores públicos, en la mayoría de los casos hacen caso omiso a la normatividad ambiental, lo que ocasiona que nuestro medio ambiente se dé un desequilibrio, producto de su actuar contrario a ley; puesto aún, teniendo conocimiento de sus funciones y competencias (controlar, supervisar y vigilar) obvian monitorear y consecuentemente sancionar aquellas personas sean naturales o jurídicas que atentan contra nuestro ecosistema.

Asimismo, la afectación a nuestro entorno tiene su repercusión en bienes de índole privada como también pública, y que se encuentran reflejado en el daño ocasionado a la vida

y su efecto inmediato en la salud de los ciudadanos como parte de una comunidad y de sus derechos que involucra de carácter patrimonial.

El comportamiento del ser humano frente al medio ambiente, en cada una de las actividades económicas y/o cotidianas que realiza, denota dos formas de realización, la primera de ellas se tornará lícita, siempre y cuando sea respetuoso del cumplimiento del sistema normativo ambiental y de sus autoridades competentes; y en segundo lugar, puede ser ilícita, cuando ese actuar se encuentra al margen de la ley lo que deviene en una afectación, generadora de un daño al ecosistema que en la mayoría de las veces resulta ser irreversible, actividades que no reúnen los requisitos mínimos exigidos (niveles de tolerancia), los cual se ven reflejados en la ausencia de contar con un permiso y/o certificación ambiental para el desarrollo del mismo.

Entonces, el concepto de daño ambiental está presente en todos los sectores del ordenamiento jurídico peruano siendo su importancia la que predomina en nuestra economía y desarrollo como Nación (SAN MARTÍN VILLAYERDE, D., 2015).

Por ello el interés de la proteger el ambiente en nuestras vidas, en razón a que se favorecería el factor socioeconómico y también nuestros mercados. ¿Acaso los daños medioambientales son únicamente importantes cuando perjudican al individuo o la sociedad?

2.6. Modalidades del daño contra el medio ambiente

Luego de haber explicado debidamente el concepto de daño ambiental, somos de la opinión que resulta pertinente delimitarlos con el objetivo de analizarlos.

Como es de conocimiento, cuando hablamos del medioambiente, estamos afirmando que este se encuentra afectado por la realización de acciones en distintas esferas: actividad minera, en lo que concierne al carburante y el aprovechamiento incorrecto y exceso de riquezas en su totalidad, cabe precisar, reducir a esta esfera de afectación, desde nuestra percepción, coexisten formas, las mismas pueden ser: deterioro, depredación y polución.

Resulta, en primer término, establecer qué se entiende como recursos naturales, mismo que se define a la existencia de elementos que forman parte del ecosistema, los mismos que son usados por el hombre para el bienestar suyo y de su comunidad cuyo valor ya sea en el presente o futuro responda a las necesidades del mercado, tales como:

- a. El recurso hídrico, sea superficial o subterráneo;
- b. La tierra (suelo y subsuelo) y su uso agrícola.
- c. La biodiversidad
- d. Los recursos eólicos, geotérmicos, hidroenergéticos y otros.
- e. El espectro radioeléctrico.
- f. El mineral.

El paraje de nuestro entorno, en cuanto nos ofrece beneficio frente a las necesidades

del hombre, es mirado como una riqueza susceptible de protección legal (artículo 84 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los RR. NN).

2.7. Daño ambiental en el Perú

En nuestro país, el menoscabo del ecosistema y sus riquezas que contiene, es necesario cuidarlo, pues existe una enorme inoculación del recurso hídrico y su detrimento; la defectuosa colocación de la basura y vertimientos; las localidades desarregladas y de elevada polución atmosférica y pérdida de condiciones de vida; la deposición de los terrenos dedicados a la actividad de la agricultura por desgaste, salina y quebranto de su utilidad; así como la deforestación forestal; la extinción de flora y fauna silvestre. (SAN MARTÍN VILLAVERDE, D., 2015).

Las aterradoras transformaciones de afectación ambiental y sus riquezas perjudican aquellas personas de escasos recursos económicos de la siguiente manera: (i) disminuyen las riquezas ecosistémicas necesarias y útiles en las labores lucrativas (elementos bióticos y abióticos), y (ii) una gran repercusión en el bienestar y/o equilibrio comunitario por la polución y la migración con dirección a la capital y demás ciudades, como la Selva peruana.

La degradación del recurso hídrico constituye uno de los más complejos problemas de la tierra y a la vez obstáculo en alcanzar un aprovechamiento sostenible del mismo, e involucra el suministro de manera sustentable. Las fuentes importantes guardan vinculación con la afectación producto de la actividad industrial, carencia de plantas para tratamiento de

los efluentes residuales, la utilización indiscriminada de insumos químicos para la agricultura, la colocación de basura en los ríos, y el detrimento de su hidrografía (...) Empero hay limitación en lo que respecta a tratar los efluentes domésticos y los derivados de la actividad industrial, e insuficiente promoción de recuperación de vertimientos contaminados, principalmente a lo largo de la región de la costa.

La problemática de la contaminación atmosférica o del aire se da mayormente en las grandes metrópolis y en sectores industriales contaminantes. En las urbes el origen esencial de la contaminación es producto de un veloz aumento de la circulación vehicular, formado por vehículos de otrora y carente de normatividad pertinente. Una afectación considerable, así como peligrosa con elevados niveles de dióxido de azufre en el combustible.

Por otro lado, en terrenos con capacidad para la agricultura y ganadería, han sido vulnerados por temas relacionados con la degradación, específicamente producto de la salina presente en el litoral, la merma gradual presente en la Serranía y consiguiente disminución de utilidad en la Selva. Un gran número de hectáreas, aproximadamente ocho, se encuentran divididas como rigurosamente desgastadas y otra gran parte, treinta y un millones, regularmente roceadas. La degradación de la tierra causa perjuicio a la producción agropecuaria, que si bien se da de forma gradual en otros momentos resulta agresiva por la presencia de fenómenos naturales, tales como aluviones, erosiones fluviales, entre otros evidenciándose en las campiñas; siendo el efecto, la merma en la actividad productiva de las mismas.

Cuando se trata el término “biodiversidad”, se torna relevante, al perjudicarse, como producto de los distintos procedimientos, lo cuales ocasionan una disminución de disposición de recursos ecosistémicos (genéticos / especies). La deforestación de las áreas forestales es un accionar de grandes efectos ecosistémicos, así como en el aspecto socioeconómico; cuyo deterioro de estos hábitats de gran importancia es peligroso por su repercusión en la extinción de la flora y de la fauna silvestre, y en donde existen especies que resultan ser protegidas por el D.S N° 043-2006-AG.

La floresta en el Perú ha padecido disminuciones permanentes en el lapso de tiempos durante las últimas décadas, con el objetivo, como política de gobierno, el emigrar a la Selva, incorporándose a la economía a través de la edificación de caminos que se conecten entre sí, así como la actividad agrícola itinerante. La actividad extractiva de la minería, enfrenta distintos contratiempos, tales como la informal, inexistencias de esquemas ambientalistas y socioeconómicos.

La actividad minería en sus diversas actividades (pequeña, mediana y grande, ha ido superando niveles ecosistémicos, los cuales se han evidenciado en el cumplimiento del marco legal establecido, permitiendo ejercer un control de manera conveniente por parte de las autoridades competentes.

Respecto a las riquezas energéticas las fundamentales metas se ubican a perfeccionar la manera en cómo el Estado actúa frente a los habitantes del lugar, quienes tiene una imprevisión de referencia adecuada o translúcida, así como, defectuosa intervención de

los ciudadanos durante la secuencia de la elaboración del combustible; y mejorar los niveles o parámetros de carácter ambiental. Es necesaria la inclusión en un comienzo y la transmisión de datos al ciudadano en su condición de propietario de un terreno, e indicando que no tiene tal condición con respecto al subsuelo, al ofertar un área.

El deterioro del medioambiente, así como el detrimento de las riquezas que nos da la naturaleza y las debacles ocasionados, suscitan importes al año de ocho mil doscientos millones de soles, al margen de lo que no percibe en la detención de procedimientos lucrativos y distanciamiento financiero. Sin embargo, debemos tener presente que aspectos como la deficiente cualidad del líquido agua y la polución atmosférica tienen un valor monetario de seis millones de soles al año. (GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA PREPARACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2008).

1º Degradación Ambiental

Debemos partir de la definición que no da la Real Academia de la Lengua Española (RAE), del término degradar cuyo significado es estropear o en su defecto deteriorar el valor propio de algo o alguien. Por otro lado, significa quitar o arrebatar un cargo honorífico que poseía. (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009).

Con respecto a la definición de deposición, desde un punto de vista ambiental, Carlos Andaluz precisa: "Es la pérdida progresiva de la aptitud de los recursos naturales para prestar bienes y servicios a la humanidad, así como la del medio físico para albergarnos en condiciones de

sanidad y dignidad" (ANDALUZ, WESTREICHER, C. 2014).

Por tanto, dañar el medioambiente es detraer poco a poco y gradualmente sus características fundamentales. La apropiada afirmación reposa en el aspecto que no toda acción que se efectúa contra el ambiente lo degradará en forma rápida, sino que comenzará un ciclo específico, cuya conclusión última tiene que ver con el agotamiento en su totalidad, así como de sus efectos benéficos.

Empero, debemos precisar que, al hablar de deterioro del medioambiente, nos referimos al desgaste paulatino que sufre éste, ocasionando una disminución de sus potencialidades y capacidades, circunstancia que resulta ser contradictoria al objetivo en común que se tiene sobre el cuidado y protección del mismo para beneficio de las generaciones del presente como del futuro.

En nuestra esfera, en la profesión del derecho, corresponde actuar con conciencia y convicción ambiental al fomentar la elaboración de mecanismos normativos que imposibiliten el resultado de la actividad correspondiente a la degradación. Así, lo manifiesta Ramón Martín Mateo:

La política ecológica y el Derecho Ambiental que la instrumentaliza, tienen por objeto aplazar al máximo este desenlace, evitando en lo posible la generación y disposición de residuos, teniendo en cuenta que, de no adoptarse las necesarias cautelas, el hombre se extinguirá fugazmente, mucho antes de lo previsto en el calendario del tiempo entrópico. (MARTÍN

MATEO, R., 2007).

Deseamos concluir esta parte citando al profesor Carlos Andaluz, quien nos ilustra apropiadamente el estado real del deterioro ambiental: por una pésima practica en el sector de la agricultura, los campos se desgastan, como producto de una degradación que afecta no solo la productividad de la tierra sino además al ponerse en contacto con el recurso hídrico, termina contaminando el agua con los residuos que lo inutilizan para su consumo humano y animal, impactando en la riqueza natural al interior de éste. (ANDALUZ WESTREICHER, C., 2014).

Empero, la deposición medioambiental adopta diferentes aristas, pero tiene el mismo efecto: se afecta inminentemente un ecosistema, en toda su magnitud.

2º Depredación ambiental

El concepto Depredación, debemos indicar que, tal como lo señalan la RAE, se entiende por depreda a toda acción de destrozo (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009).

Carlos Andaluz, desde la perspectiva medioambiental, la palabra depredar, "está referida al uso no sostenible de los recursos naturales renovables, es decir, aquel uso que excede la capacidad de carga del recurso impidiendo su capacidad de regeneración por resiliencia" (ANDALUZ WESTREICHER, 2014).

Cuando se habla de deterioro o depredación ambiental está se da cuando el hombre hace un

uso desmedido de las riquezas que nos brinda la naturaleza haciendo que esta cada día se vea destruida y fragmentada, sin preocuparse por la regeneración natural menos aún intentar desarrollar sus actividades económicas de manera sustentable. (SAN MARTÍN VILLAFUERTE, D., 2015).

Empero, las aptitudes que posee una riqueza natural se reducen en la medida en que se imposibilita su ascenso y desarrollo. Por lo que, el ser humano utiliza las riquezas cuando deseamos, sin interesar que estos aún se estén desarrollando.

Dicho de otro modo, si una riqueza natural resulta ser afectada cuando aún no ha llegado a obtener su madurez, estaremos mutilando no solo su desarrollo propio sino sus capacidades y beneficios que nos ofrece como tal para el ecosistema.

3º Contaminación ambiental

Andrés M. Briceño Chaves: "La contaminación, pues, puede entenderse como el cambio en el estado físico, químico o biológico del medio natural, en conjunto, o de alguno o algunos de los elementos o unidades físicas que los componen" (BRICEÑO CHAVES, A., 2009).

Ahora, cabe manifestar que es frecuente relacionar la afectación al medioambiente con la contaminación existente; pero ello no es del todo cierto; según Briceño, cuando se habla del término contaminar, se refiere aquella situación real cuya circunstancia influye de manera directa en el ambiente, modificándolo o deteriorándolo. (BRICEÑO CHAVES, A., 2009).

Podemos afirmar que el concepto de contaminación es todo aquello que solamente es cuantificable, lo que no sucede con la afectación contra el ambiente que sí tiene que ver con aquello cualitativo (ANDALUZ WESTREICHER, C. 2014).

Por su parte, Luis Femando Macías considera que: "nuestro planteamiento es que sólo se podría hablar de contaminación cuando se esté frente a sustancias o energías colocadas en el medio natural por encima de los límites establecidos por la ley" (MACÍAS, L., 2009).

En esa misma línea argumentativa, se tiene que se puede encontrar una variedad de nociones, citamos a Carlos Andaluz, quien indica: El acto de contaminar por parte del hombre, es el hecho mismo de introducir a nuestro entorno (directa o indirectamente) agentes biológicos, físicos-químicos o una mezcla de estos en volúmenes que superan los niveles establecidos para mantener los hábitats aptos para el desarrollo de la vida. (ANDALUZ WESTREICHER, C. 2014).

En ese sentido, existirá una efectiva afectación al medioambiente cuando ésta pueda cuantificarse y su efecto sea de tal magnitud que lo deteriore, recién allí hablaremos de la existencia de un acto contaminante

En esa misma línea argumentativa, Antonio Andaluz: Parte de la idea que en el transcurrir de la vida se realizan actividades que de alguna forma contaminan el ambiente, lo cual es imposible no darse; sin embargo, lo que se busca desde el punto de vista jurídico es obtener un ambiente equilibrado, es por ello que existen parámetros ambientales debidamente

establecidos y para su cumplimiento se requiere no solo el compromiso del ser humano sino de una gestión de política ambiental que busque sobre todo la calidad ambiental a fin de que el beneficiado sea la colectividad y por ende nuestro planeta en su conjunto. (ANDALUZ, A., 2009).

Lo más relevante cuando se trata de contaminar el medioambiente es detenerse en los aspectos cuantitativos de investigaciones efectuadas, tal como refiere Antonio Andaluz, no se está en contra de la existencia de acciones contaminantes, por cuanto sería imposible no convivir con esto, sino por el contrario, se trata de respetar los límites máximos permisibles, contenidos en la normatividad ambiental.

En efecto, una forma de medir o en todo caso crear un estándar a fin de mantener el equilibrio en el ambiente, es precisamente el establecimiento de Límites Máximos Permisibles (LMP) y los tal llamados Estándares de Calidad Ambiental (ECA), por el simple hechos que partimos de la idea que tanto los suelos como los ríos se encuentran al libre albedrío de los actividades que desarrolla el ser humano como parte de su actividad diaria, por lo que muchas de las veces estos son contaminados con residuos sólidos e incluso aguas residuales domésticas como industriales, los mismos que son arrojados y/o vertidos en los cauces de los ríos, conllevándolos a una muerte lenta y continua de los hábitats que contienen y que su presencia favorecen al ecosistema con su permanencia por contribuir al desarrollo de la vida en nuestro planeta. (LOPERENA ROTA, D., 2013).

4° La contaminación atmosférica: énfasis en la contaminación del aire

Según James Reátegui: Cuando hablamos de la contaminación del aire no podemos perder de vista aquella capa gaseosa que envuelve a la tierra, la misma que se encuentra inherente a ella, la misma que resulta de la dispersión de humos por parte del creciente parque automotor y de la inexistencia de normas que sean eficaces por lo que ocasiona un escaso control por las autoridades competentes. Los efectos de la contaminación se pueden dar a nivel del clima, afectación a la salud del hombre, degradación de la vegetación y su consecuente perjuicio a los animales, circunstancia que deviene en una modificación del paisaje de nuestro entorno natural. (REATEGUI SÁNCHEZ, J., 2006).

En tal sentido, podemos afirmar que contaminar el entorno es una acción que se distingue por vulnerabilidad en que se encuentra nuestro entorno, al margen de la repercusión en otras riquezas. Pero, los movimientos económicos y/o industriales que se realizan de manera diaria afectan el aire y, consecuentemente, el bienestar del ser humano, así como de los seres bióticos y abióticos que lo involucran.

Loperena Rota: señala que: En lo que respecta a la contaminación del aire, somos conocedores que las contaminaciones de las ciudades promueven un gran número de enfermedades, de modo que las emanaciones del CO₂ ocasionan la retención del calor, trayendo como consecuencia el calentamiento global, produciendo la lluvia ácida (emanaciones de azufre) y sus peligrosos efectos sobre los forestales específicamente, y de los daños que ocasionan los rayos ultravioletas así como los CFC que consumen la capa de

ozono de la estratósfera. (LOPERENA ROTA, D. 2013).

Jorge Gutiérrez al referirse a la contaminación atmosférica hace alusión a una clasificación, la misma que puede ser primaria; siempre que el acto contaminante, es decir, la fuente sea identificable y se vierta directamente a la atmósfera, por ejemplo, los gases tóxicos expelidos por los tubos de escape de los vehículos; mientras que será secundaria, en el caso que las reacciones químicas provengan o sean producidas por las primarias; y finalmente, la contaminación de referencia, la misma que está compuesta tanto por la primaria como la secundaria, un caso concreto las que se evidencian en zonas urbanas. (GUTIÉRREZ SISNIEGAS, J., 2008).

5° Contaminación de las aguas

En efecto, también podemos hablar de cómo se puede contaminar las aguas, no obstante ser un recurso privilegiado para quienes en forma abundante y suficiente gozan del mismo; sin embargo, hoy en día ocupa uno de los recursos naturales que resultan estar más contaminados, y que su uso defectuoso resulta ser una preocupación constante por la utilidad que representa para la supervivencia de los seres vivos.

Diego San Martín (SAN MARTÍN VILLAFUERTE, D., 2015) señala que el Estado tiene como función primordial de dotar del líquido elemento a las comunidades de nuestro país, y cubrir de esta manera las necesidades poblacionales; convirtiéndose de esta forma en un derecho el tener acceso al agua, por lo que su política está orientada a conseguir que este

recurso llegue cada vez más a gran número de personas; y que para tal efecto, deberá ejercer sus funciones, a través de sus organismos descentralizados de supervisión, vigilancia y control de esta fuente indispensable para tener una vida digna. (LGA N° 28611).

Podemos advertir que en LGA precisa circunstancias extraordinarias (no distantes a lo que se vive hoy en día) como la escasez de la fuente de agua, situación que será complementada y explicada debidamente en la normatividad ambiental.

La exigencia consustancial y esencial del tener acceso al líquido elemento, llevó en sí que la distinta normatividad legal destine todos sus trabajos en la confección de medidas estrictas para el uso de ésta.

Tal como afirma Ramón Martín Mateo: La subsistencia no es posible si no contamos con un oxígeno saludable. A través del tiempo los seres vivientes han sido sobrevivido en ambientes sin oxígeno, pero no sin líquido, llegando a la conclusión que ésta se desenvuelve bajo otros contextos; el motivo de que los cuerpos celestes, en su conjunto, que se ha examinado no hay vida. Ante todo, esto es parte de esta reflexión el afirmar que aún en terrenos áridos o secos la capacidad reproductora se ha mantenido incólume, caso concreto, en las tumbas de los faraones se encontraron semillas que gran potencial reproductivo; es por ello, que cuando hablamos del ser humano, éste contiene la mayor parte de su organismo del líquido elemento, en un 60/100; pues la inexistencia en el cuerpo del agua nos conllevaría a la muerte. (MARTÍN MATEO, R., 2007).

Contaminar el recurso hídrico constituye una forma que atenta o mejor dicho lo hace vulnerable por la importancia que significa como tal; es por ello cuando se suscitan vertimientos de carburantes por parte de embarcación, tiene como efecto inmediato, que acaban con la vida acuática así como de la residente en tierra; siendo el petróleo, también conocido con la denominación “oro negro”, cuanto se encuentra presente en el agua, resulta ser un tóxico de alta peligrosidad para todo ser vivo que siente afectado su hábitat.

Asimismo, el líquido elemento es fundamental para el cumplimiento del crecimiento sostenido, el uso acertado y eficiente nos conlleva al desarrollo sustentable, señalado y descrito en los párrafos precedentes. En consecuencia, la sostenibilidad se consigue con el aprovechamiento de las riquezas que nuestra naturaleza nos ofrece, las mismas que deben ser utilizadas de manera responsable para asegurar el bienestar de las poblaciones actuales y el futuro de estas.

Cuando el recurso hídrico es aprovechado partiendo de la idea de la sostenibilidad, veremos que el objetivo final se cumple; lo que nos conduce a meditar y deducir que las riquezas de nuestro entorno, como también los seres bióticos requieren de este recurso para subsistir; de este modo alcanzar el máximo potencial de sus peculiaridades.

De este modo, el Principio de Sostenibilidad descrito en el numeral 6° del artículo III de la Ley de Recursos Hídricos; el mismo que sostiene: El Estado tiene un deber, el de promover-controlar la utilización y preservación sustentable del líquido elemento, debiendo prever cualquier acción que conlleve a causar un daño medioambiental; así como la posición natural

del contexto, como componente del hábitat en que se desarrolla.

El aprovechamiento y administración sustentable del líquido elemento conlleva a la adhesión proporcionado de los criterios medioambientales, socioeconómicos y culturales en el progreso gubernamental, de modo que se tenga como objetivo final el bienestar y avocamiento a suplir las exigencias de las poblaciones del hoy y del mañana.

6° Contaminación del suelo

Por su parte, Carlos Andaluz: En la mayoría de las oportunidades se utilizan los términos tierra y suelo como palabras de significación parecida; sin embargo, hay una diferencia, pues existe una relación de género a especie; por lo que deberá entenderse por suelo cuando nos referimos a la superficie terrestre, es decir, aquel ámbito con capacidad de sostener todo aquel cuerpo que es atraído por la energía de la gravedad; por otro lado, el término tierra es utilizado cuando dicha área resulta ser proclive a la actividad de la agropecuaria; es decir, cuando es útil para acoger de manera productiva la flora y fauna silvestre microbianas que le dan un matiz orgánico. (ANDALUZ WESTREICHER, C., 2014).

Del mismo modo, se afirma que hablamos de la palabra tierra, cuando nos referimos que dicho recurso es sustituible, la misma que hace alusión a la riqueza natural factible de restablecerse o reconstituirse por su idoneidad de adaptación y/o auto regeneración que tiene nuestro entorno y resulta ser una peculiaridad de las riquezas renovables (ANDALUZ WESTREICHER, C., 2014)).

La utilización sustentable de las riquezas no sustituibles, mismas que se definen como aquellos actos tendientes a una eficaz explotación de aquello, en mérito al principio de relevo de sus actuales beneficios, si tener de causar impactos negativos significativos sobre las riquezas naturales que forma parte de nuestro medioambiente (LEY ORGÁNICA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, Ley N° 26821).

7° Otros tipos de contaminación:

Contaminación atmosférica

Lo antes mencionado nos orienta a señalar que el aire es esencial para nuestras vidas, para nuestra salud, sobre todo. En tal sentido, es imprescindible que se adopte medidas al respecto y es precisamente esto lo que debe llamar toda nuestra atención a los ciudadanos, mostrando un comportamiento de acuerdo a la normatividad ambiental vigente; por otro lado, el Gobierno estableciendo coerción para precaver que la afectación cause mayores impactos a la atmósfera, principalmente en lo concerniente a los puntos críticos como resultado de la creciente parque automotor que se viene dando en estas última década y que pone en vilo la calidad ambiental atmosférica.

Especialmente en nuestro país el ingreso de autos usados es perjudicial, el hacinamiento de calles con las "combis" que han hecho colapsar el sistema vial limeño (y pronto de todo el Perú) y el smog vertido por autos, microbuses, camiones en mal estado causan daños irremediables. No puede hablarse más de un "paseo bonito y armónico por el centro de Lima", puesto que lo más probable es que respiramos humo y gases perjudiciales a la salud producto de la gran

cantidad de vehículos en la zona. Esta situación se repite continuamente y Lima deja de ser el centro de este problema.

Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes

Asimismo, se incluyen presuntos actos contaminantes de carácter significativos, los cuales serán explicados de manera puntual y escueta.

Siendo así, existe una radiación (tipo ionizador), la misma que afecta tanto al hombre como a la fauna; y esto se da precisamente porque traspasa la materia; de otro lado, tenemos la no ionizante, aquello que tiene que ver con los objetos de gran voltaje, material radioactivo o nuclear.

En lo referente a la radiación no ionizante, se debe señalar que últimamente han ocasionado mucha inquietud colectiva, aquellos potenciales peligros, principalmente para el bienestar del ser humano, productos de los actos contaminantes de tipo electromagnético, el mismos que puede expandirse por ondas.

Una transmisión de ondas en el aire es permanente, a veces se presuponen la emisión al medioambiente de electromagnetismo, denominada "electropolución" cuya variante "no ionizante", ubicado en el contexto conocido como de la contaminación rigurosa; por el peligro que significa resulta ser abierto, recomienda la prevención sobre los presuntos daños provenientes de la exposición a fuentes electromagnéticas (SAN MARTÍN VILLAFUERTE, C., 2015).

Contaminación sonora

Por otro lado, abordemos el tema de los actos contaminantes de carácter acústicos. De acuerdo a Andaluz, aquélla es el "conjunto de sonidos que directa e indirectamente interfieren en el ser humano a través del sentido de la audición. Estos sonidos, cuando perturban una captación sonora deseada o son percibidos como molestos, se denominan ruidos".

Empero, el malestar realizado por el sonido está supeditado a las circunstancias indicadas anteriormente. En mérito a su reiteración, los acústicos finos resultar ser incómodos que los peligrosos, y un tañido elevado es considerado perjudicial para la audición que uno complicado; dada a la persistencia, un sonido de un nivel moderado resulta ser dañino cuando la emisión perdura en un período prolongado sobrepasando los límites exigidos al término de las veinticuatro horas.

Contaminación por residuos sólidos

En suma, hablaremos en forma precisa qué se entiende por desechos sólidos y cuál es su efecto contaminante en la sociedad.

Cuando nos referimos a desechos sólido, es necesario recurrir a la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), la misma que lo define como el conjunto de sustancias sólidas o en su defecto semisólido que deben ser tratados a fin de que estos no causen una contaminación ambiental e incluso activar un plan de riesgos y de este modo atentar contra el bienestar del ser humano.

Por su parte Mauricio Paredes, considera que la conceptualización dada por la Ley General de

Residuos es extensa; sin embargo, acota, que ello no significa un limitante para afirmar que un residuo es descrito como todo aquello que causa contaminación y las obligaciones que emana de la regulación normativa ambiental se orientar precisamente a cumplir con la disposición adecuada y pertinente a fin de salvaguardar la salud del hombre y el ambiente. (PAREDES CONTRERAS, M., 2008).

2.8. Características y tipos de daño

a) Incertidumbre

Todos los actos contaminantes en la mayoría de las veces son imposibles de conocer, primando la incertidumbre, la misma que es propio en conflictos ambientales; ya nos decía la Declaración de Alcalá sobre Contaminación Electromagnética y la Salud estableció: “la controversia es la norma cuando del reconocimiento de los efectos ambientales se derivan consecuencias económicas importantes y posibles efectos para la salud”. En efecto, esta apreciación se condice cuando se señala que un daño ambiental debe ser cierto más no potencial para poder aseverar la existencia del mismo y de este modo adoptar las acciones o medidas necesarias y urgente para buscar un ambiente equilibrado y sano para el desarrollo del ser humano. En consecuencia, no debemos olvidar que aquellas alteraciones protagonizadas por el hombre y que resultan ser atentatorias con el bienestar de éste y su entorno, son difícilmente poco conocidas e incluso inviable su conocimiento.

Del mismo parece es la legislación argentina, plasmado en el fallo de 1995 (Almada contra Copco S.A), considerando que cuando se habla de daños de carácter ambiental son aquellas acciones que tengan suficiente certeza y que sus riesgos potenciales, sin necesidad

de encontrar una probanza inmediata estos no es razón para que los mismos sean considerados como un daño a un futuro cercano, evitando en todo momento que éste se torne en irreparable.

De igual manera, la Sala Constitucional de Costa Rica (sentencia 1250-99// 19 de febrero 1999) resolvió lo siguiente “De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible - o una duda al respecto – se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”. Del mismo modo, una resolución más reciente y sobre el mismo tema estableció: “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”.

En efecto, existe una escala para medir la magnitud, la misma que se encuentra relacionada con las mediciones en kilómetros (Macroescala), hectáreas (Mesoescala) y en metros cuadrados (microescala) y estas a su vez vinculadas a espacio-tiempo; asimismo, existe otra clasificación, según la relevancia del daño; de ese modo hablamos de la singularidad y descripción de las riquezas degradadas, su diversidad, capacidad de regeneración de los hábitats, precariedad ambiental y su preservación.

b) Carácter difuso y expansivo del daño ambiental

El daño al medio ambiente es de carácter difuso, por el hecho de que resulta reconocer qué, quién o quiénes lo originan, y, además, por la resolución de aquellos autorizados a realizar o acudir a las instancias judiciales o administrativas o en su defecto ante las autoridades respectivas hacer valer su derecho de acción, del mismo modo donde exista la posibilidad de un potencial resarcimiento.

Visto de otro modo, la afectación a nuestro entorno natural, por el solo hecho de ser considerado como una acción que genera impactos negativos, sino son tratados con cautela, tratando de mitigar, preservar o en su defecto reparar el daño ocasionado, estos resultarían ser un efecto “cadena” que darían pie a un impacto mayor y por consiguiente deterioro de nuestras riquezas naturales. (GONZALES, R. 2001).

Es por ello que estos impacto al medioambiente resultan ser dilatados y extensos sino son atendidos de manera diligente y urgente adoptando las acciones o medidas ambientales adecuadas; caso contrario, estos efectos primarios, en un inicio, se pueden convertir en otros de mayor intensidad.

c) Daño concentrado y daño diseminado

Estamos frente a dos definiciones, que en suma ponen de relieve el daño al medioambiente; lo que diferencia una de la otra es la magnitud del mismo en un espacio determinado; pues hablaremos de una afectación de tipo concentrado cuando éste acto contaminante se encuentra en un área plenamente identificada; mientras que se de tipo diseminado, cuando

dicho menoscabo es de carácter difuso, es decir, la afectación resulta de difícil identificación por cuanto se da en todo un territorio y existe pluralidad de fuentes productoras del mismo, tal es el caso, como ejemplo típico el calentamiento global.

d) Daño continuado, permanente o progresivo

Cuando hablamos de un daño continuado, se hace referencia a toda acción conjunto de actos contaminantes que permanece en el tiempo en etapas distintas y por autores diversos

Por su parte, estamos ante un daño progresivo tiene que ver si bien es cierto con actos sucesivos cuya repercusión en el entorno tiene un mayor impacto negativo significativo, de darse individualmente, los mismos que han sido ocasionados por cada acción perjudicial, es precisamente a esta parte que los investigadores han denominado “saturación”.

e) Daño biofísico y daño social.

Ahora bien, existen afectaciones biofísicas realizadas en el ecosistema que producen un detrimento en las peculiaridades paisajísticas que nos ofrece la naturaleza. Por otro lado, cuando se trata la afectación en relación a su aspecto social, éstas se encuentran vinculada a esa consecuencia negativa que sufre el medioambiente, provocando la baja en los grandes beneficios que nos ofrece (VEGA, E., 2004).

Cuando hablamos del daño moral ambiental de tipo colectivo, es necesario mencionar a Galdós (GALDÓS, J., 1998), mismo que lo define como el avasallamiento de aspectos basados en el interés extrapatrimonial establecidos en estratos o tipos de individuos,

cuyo vínculo es, fundamentalmente personal o ideal.

En un inicio, se parte que el menoscabo ambiental es difuminado en los diferentes individuos – sin nexos legal a saber – y resulta ser reincidente como propósito relevante, compartido y común, evidenciando capacidad, en el afán de agrupar a los que estén fundamentados en hechos idénticos.

Posteriormente, como elemento llamativo es visible con injerencia global, ya que calza afectación a intereses de carácter público o colectivos, sin predisposición a la retención o uso privado y exclusivo. En esta suposición el ecosistema califica la afectación, al preciso momento de expansión de las consecuencias peligrosas, en relación a los que se gozan, utilizan o se aprovechan con el asunto trasgredido. Una transmisibilidad de bienes convergentes resulta irrelevante en cuanto a su procedencia de los individuos, por el contrario, deviene en lo colectivo, cuya afectación se extiende a una multiplicidad de seres.

Según indica Lorenzetti (LORENSETTI, R., 1997), en esa misma línea, pone énfasis en la conservación del bien público, no sólo como un daño al entorno social del sujeto, sino del bien público que forma parte del operativo común y grupal. De lo antes mencionado, podemos decir que, al perjudicarse este interés de índole colectivo, el deterioro moral ambiental tiene relación con la afectación del entorno per se, pues mantiene una autonomía en los efectos producidos, basándose en que esta afectación se da en forma amplia en toda extensión y existencia.

Por otro lado, el daño incorpóreo es originado por la afectación a objetos extrapatrimoniales y comunes. De modo que hablamos de un individuo perjudicado cuando no referimos a una persona física individual, así como, a un determinado sector y esfera que

en forma común y un mismo motivo, le son conculcados sus derechos indispensables a vivir en un ambiente equilibrado y tranquilo, respecto al detrimento padecido en que se desenvuelve nuestro entorno. El tratar el menoscabo moral común de índole medioambiental presenta opositores; estos, le incriminan el inconveniente que involucra su cálculo dinerario, abriendo la posibilidad, de que las compensaciones enormemente altas, y las posibilidades de peticiones insustanciales o imprudentes incrementaría.

Del mismo modo, podemos atribuir lo de la escasez de antecedentes en gran parte de las regulaciones e incertidumbre legal que los orienta. Asimismo, los aspectos trazados por sus contrarios, se percibe, como pedidos ejecutados, siendo a lo largo de los años que ha acreditado deterioro moral colectivo; no obstante, en la actualidad nadie refuta su efectividad, y, por tanto, se debe comenzar a establecer precedentes, con el objeto que estos sirvan de referencia con los cuales edificar un sustento valorativo, con sus respectivas características. Al tocar el medioambiente un interés común o pública, lo más importante es minorar el sosiego e imperturbalidad que pueda padecer la comunidad como un todo, haciendo alusión a los individuos que forman parte de ella.

Siendo así, podemos definir al daño moral colectivo como el menoscabo en la quietud anímica y espiritual que experimenta la sociedad total, lo que se equipara a la afectación de intereses comunes de índole no patrimoniales, originada por el perjuicio realizado al medioambiente circundante. La peculiaridad esencial del daño moral público (individual o grupal), pues lo padecen tanto una sociedad así como los individuos que la componen.

En consecuencia, si existe el derecho para realizar acciones en protección del

medioambiente, y en consecuencia, peticionar una restauración y reparación en sí mismo, lo que determina que un Estado, así como los individuos que forman parte de la comunidad perjudicada y a grupos sociales debidamente organizados, el dominio de la defensa en la solicitud indemnizatoria; y que cuando nos referimos a la afectación moral común de carácter ambiental, no es visto de manera personal, y no global, y el dinero obtenido por reparar esta afectación, le corresponden a la comunidad global, la cual, estando dentro de sus derechos el poder investigar sobre la forma de distribuir los totales como parte integrante de la comuna y fueron perjudicados por este tipo de afectación.

Asimismo, resulta posible que una acción resarcitoria por el daño común, sea otorgada sea por una fundación o asociación, misma que elegirá la manera de dividir las sumas obtenidas por dicha acción reparatoria, dividiéndolas entre sus miembros, o en todo caso, empleándolas en programas medioambientales con el fin de darle un aprovechamiento sostenible a favor de la colectividad.

En cuanto al aspecto de interpretación está como precedente la demanda interpuesta por la Municipalidad de Tandil contra T.A La Estrella S.A contra la Empresa S.A por el perjuicio causado por el autobús de propiedad de la aludida empresa al grupo escultórico Las Nereidas; y en donde la Cámara de Apelaciones en materia Civil y Comercial, ubicado en el Departamento Judicial de Azul en el país de Argentina, la misma que dispuso reconocer como sujeto pasivo a la Entidad Edil, como persona jurídica, legitimada para defender los intereses difusos de cada uno de los sujetos que forman parte de una comunidad y en donde se han visto vulnerado tal derecho.

Empero, este fallo, mencionado en el párrafo anterior, consideró que la suma de la

reparación por el perjuicio colectivo se emplee en la restauración de las obras afectadas y que han empañado desde el punto de vista ambiental el ornato de la comunidad; de modo que las autoridades tanto del gobierno nacional, regional y local, como responsables y vigilantes de la escultura deben priorizar los intereses difusos de modo que se tutele dicho derecho, buscando en todo momento que se cumpla con la reparación plena del daño indebidamente ocasionado (VALLS, M. 2000).

2.9. Los delitos ambientales

Desde el punto de vista filosófico, tenemos que se puede partir de la idea de lo que es atentado contra el medioambiente, es decir, se trata de contribuir a la protección de nuestro ecosistema, la cual resulta ser más que un derecho es un deber de cada uno de los miembros de una comunidad el mismo que debe velar por su preservación y conservación.

Ahora bien, cuando hablamos de crimen ecológico, debemos remitirnos al derecho anglosajón y principalmente el derecho europeo, pues se trata de un delito que atenta o viola la normatividad de carácter ambiental; el mismo que se encuentra inmerso en los temas de pesca ilegal de productos hidrobiológicos que al igual de las grandes deforestaciones de nuestros bosques, así como la actividad minera ilegal, entre otros actos que contravienen las leyes, reglamentos, directivas, entre otros, que limitan las actividades económicas que desarrolla el ser humano.

Que mediante el D.L N°635, publicado en el Diario Peruano con fecha 18 de abril de 1991, fue aprobado el Código Penal vigente hasta nuestros días, que bajo el título XIII sobre

Delitos contra la Ecología, en donde se tutela este tipo de delitos el bien jurídico es el medio ambiente, el mismo que tiene su sustento constitucional en la Carta Magna del año 1979.

En ese sentido, nuestra norma legislación en materia penal contempla los atentados contra la riqueza natural y el ecosistema. Es por ello, cuando hablamos del medioambiente, nos referimos precisamente a ese bien jurídico tutelado de carácter social y económico, a fin de que las actividades económicas estén supeditadas a ciertos criterios indispensables y útiles para el fiel cumplimiento de las normas de carácter ambiental, mismas que favorecen un mayor control social extra penal y que resulta válido que para tal efecto se considere en lo pertinente dicha legislación administrativa para tutelar el ejercicio de vivir en un ambiente sano y equilibrado.

Por su parte, nuestra ley penal, tal como he venido sustentado dedica todo un título denominado DELITOS AMBIENTALES; en donde se establece el grupo de delitos cuyo bien jurídico es el medio ambiente, delitos como la degradación de suelos y por consiguiente de nuestros recursos naturales, y que guardan relación directa sobre la ordenación territorial, el uso indebido de tierras agrícolas, así como, lo referido a la ordenación territorial.

Es obvio que nuestra normatividad en lo que concierne a este título, existe problemas de orden técnico, vaguedades e imprecisiones con respecto a la conducta penal descrita en el tipo penal, que imposibilitan el cumplimiento de la finalidad que forma parte de la política ambiental-criminal, la misma que se encuentra descrita en el Título XIII y en donde se ha puesto de relevancia, a través de cuatro capítulos aquellos relacionados con la Contaminación, los Recursos Naturales, Responsabilidad Funcional e Información Falsa y por último el tema de las Medidas Cautelares, Exclusión y Reducción de penas; no olvidemos que estas

innovaciones normativas se dio a partir del 02 de octubre del 2008 mediante Ley N°29263.

Con respecto al bien jurídico tutelado, a la hora de definirlo, la doctrina en general nos da diferentes propuestas de acuerdo a la magnitud descrita sobre la definición o de qué entendemos sobre el tema ecosistémico de nuestro entorno. De modo que, en cuanto a la definición del concepto de bien jurídico, resulta que es prolongada hacia sus esferas mayormente extensas comprendiendo a través del tema sobre el ecosistema, que resulta ser todo aquello que de forma acertada o nefasta influye sobre la permanencia del ser humano de en forma digna y con calidad de vida. En efecto, esta definición es producto de una reacción que carece de satisfacción, de modo que, en el concepto más lato, imposibilita su constitución inherente en la relación con bienes jurídicos, los mismos que se encuentran tutelados en el derecho penal. (DE LA GÁNDARA VALLEJO, B., 1998).

El capítulo primero describe el delito de contaminación y sus distintas maneras de considerar una conducta como agravada. Este conducta penal ha sido totalmente variada, sin embargo, aún mantiene el castigo culposo, pues plantea la denominación del delito de incumplimiento de normas relativas al manejo de la basura; sin embargo, aún permanece descrito como conducta ilícita, para las personas que conociendo la normatividad vigente (leyes, reglamento o disposiciones) las contraviene, específicamente en el tema de los basureros en donde muchas veces existe sujetos que utilizan estos para sus alimentos de chanchos u otro animal destinado al consumo humano para la alimentación de animales destinados al consumo humano

Cuando se habla de contravención en los delitos de contaminación, se parte de las conductas que se exigen para que sean calificadas, tales como provocar o realizar acciones

que sean en forma directa o indirectamente y que estas no solo causen o puedan causar un daño, sino que además se debe actuar contrario a lo establecido en la normatividad ambiental, tutelándose para estos efectos el medio ambiente. (SERRANO GÓMEZ, A., 2007).

Empero, la basta doctrina está orientada a buscar una definición de lo que significa medioambiente y que para tal efecto algunos de los penalistas consideran que el medioambiente es la suma de los aportes naturales que nos da la naturaleza para el bienestar de la vida humana, por lo que resulta que el Estado ejerza su protección y conservación de la naturaleza. (DE LA GÁNDARA VALLEJO, B. 1998).

Ahora bien, si tenemos que determinar quiénes puede incurrir en este tipo de delitos, la norma misma no hace ese deslinde, por tanto, el sujeto activo puede ser cualquier persona, sin importar cargo, profesión o condición laboral; por el contrario, si tendríamos que identificar quién o quiénes serán los agraviados, definitivamente, coincidimos que es la colectividad; sin embargo, resulta un tanto vacía esta norma, porque hoy día las personas jurídicas pretender eludir sus responsabilidad, refiriéndonos a los Representantes Legales, quien atribuyen que los mismo no tendrían mayor responsabilidad en un delito de contaminación, siempre y cuando no esté contenido su condición de “garante” en su Manual o Reglamento de Organización y Funciones, caso contrario resultaría inútil ser considerado como tal; circunstancia que ha traído varias complicaciones e incluso interpretaciones sin que a la fecha haya quedado zanjado desde el punto de vista jurisprudencial. (VIVES ANTÓN, T. 1996).

Las conductas aludidas son castigadas cuando éstas se realizan con pleno conocimiento (dolo directo/dolo eventual) de su aspecto ilegal. (MUÑOZ CONDE, F. 1999),

puesto que la conducta normalmente no busca dañar el medio ambiente, sino que resulta ser un medio como desarrollo de una actividad mayor que tiene una finalidad también mayor y que tiene como medio la alteración del equilibrio ecológico referido.

El capítulo segundo describe las conductas relacionadas al atentado contra las riquezas naturales, siendo el espacio de protección mucho más intenso que el delito anterior, ello en razón que lo castigables es precisamente el comercio ilegal de la flora y fauna silvestre, las mismas que se encuentran protegidas por el Decreto Supremo N°043-2006-AG; y sus consecuencias, en la fragmentación de los hábitats como producto de una agresiva deforestación, que en esta última década se ha visto incrementada por organizaciones criminales que han aprovechado la escasa atención por parte de los gobiernos regionales o locales en el cuidado del medio ambiente, en donde existe presencia de acciones de minería ilegal así como el cambio de uso de tierras agrícolas, principalmente y de este modo se viene alterando el medio ambiente.

En efecto, se habla de un error vencible o no, cuando nos referimos a la pesca o caza, resulta impune; por lo que no debemos olvidar que tan solo se sancionan los delitos o comportamiento de tipo doloso directo o eventual. (SERRANO GÓMEZ, A., 2007).

Por tanto, hablamos de consumación, cuándo ésta se ocasiona cuando se atenta contra especies de fauna que son consideradas como amenazadas o en su defecto el resulta atente contra su reproducción o migración. Sin embargo, puede darse la tentativa en los casos, por ejemplo, en el ejercicio de la actividad deportiva de la caza, el animal ha quedado herido, existiendo la posibilidad de recuperarse sus lesiones. Por otro lado, el acto de la comercialización quedará consumado, en la misma acción de compra y venta, principalmente

en la entrega; sin embargo, será una tentativa si el comprador finalmente no puede disponer del bien adquirido de manera libre. (SERRANO GÓMEZ, A., 2007).

Es necesario precisar que el objeto del delito; es decir su acción recae en las especies ya sea de flora o fauna, pero que estas se encuentren protegidas. Cuando se hace alusión a especie protegida y/o resguardada engloba todas las especies protegidas por las normas de carácter internacional. La norma castiga toda comportamiento destructivo sea a través de la caza o en su defecto capturarlas, recolectarlas o en su defecto extraerlas para finalmente comercializarlas. Asimismo, se tiene que una de las razones para ser sancionadas estas conductas, es que al realizarlas se atenta contra su reproducción, pues la gran parte de estas muchas veces se cazan, extraer o comercializan, principalmente en tallas juveniles, pues por su tamaño resulta no sólo un efecto económico inmediato, sino que es más accesible para el consumo humano, por su costo significativo está al alcance del “bolsillo” de los más necesitados. (DE VICENTE MARTÍNEZ, R. 2002).

El capítulo tercero aparece una calificación jurídica interesante, pues recoge el comportamiento de los representantes legales de las personas jurídicas y por otro lado, la responsabilidad de funcionario por otorgamiento ilegal de derechos; agregando aquella conducta penal que tienen que ver aquella responsabilidad que asume la persona que ingresa información falsa en informe con la finalidad de evadir los controles forestales.

Del mismo, modo el apartado final está orientado a definir las medidas cautelares concedidas por el Órgano Jurisdiccional, mismas que tiene su basamento en la facultad del juez para dictar ciertos requerimientos cautelares, descritas en la norma, asimismo, hoy en día se habla mucho de esta figura que responde a la confesión sincera por parte de los autores o

partícipes, siendo así se les otorga un beneficio, el mismo que esta relacionado con la reducción de la pena; aspectos que se encuentran contenidos en un nuevo tipo penal.

En consecuencia, considera que el medio ambiente, resulta ser el bien jurídico tutelado por nuestra normatividad penal vigente; en tanto, que se entiende como tal, al conjunto de los componentes biológicos, físico, químico y sociales, los mismos que se vinculan e interactúan entre sí. En suma, es precisamente que como producto de esta interacción es que da lugar el equilibrio en la naturaleza; y cuando este es quebrado por un comportamiento antropocéntrico, trae como efecto un daño, que a nuestro concepto éste resulta irreparable, difícil de restituirse, por el contrario, lo que sí se puede hacer es mitigarlo, conservarlo o en su defecto repararlo. Asimismo, "el concepto de ambiente hace referencia a aquel en donde se integran los seres vivos, es decir, aquel dentro del cual interactúan formas de vida. Obviamente, hay un particular énfasis en la preocupación por los ambientes humanos, en la medida en que su conservación garantiza nuestra existencia.

Sin embargo, ello no excluye que podamos identificar ambientes que corresponden a organismos vivos diferentes al humano. Por ejemplo, el de las especies endémicas de la fauna amazónica" (PULGAR VIDAL, M., 2003). De modo que, el título XIII hace una descripción de las conductas delictivas contra nuestro patrimonio forestal, el mismo que cobija a especies de flora y fauna silvestre. Tal como hemos venido mencionando, a la norma penal le interesa determinar, al amparo del Principio de Lesividad, aquellos comportamientos atentatorios contra el medioambiente y sobre todo se encuentren descritos como conductas ilícitas (título XIII).

Penalistas como Alfonso Peña Cabrera (PEÑA CABRERA FREYRE, A., 2010)

sostienen que los atentados medioambientales son hechos descritos en la conducta penal, existiendo las siguientes posibilidades:

- a. Se puede causar un perjuicio o variación al ecosistema o en su defecto de sus componentes, en otras palabras, que la conducta del individuo activo puede ocasionar un riesgo potencial, daño o alteración al ambiente o sus componentes;
- b. Se verifique aquel perjuicio real, en otras palabras, queda probada la conducta de una persona, la misma que ha provocado un peligro eminente al medioambiente o de algunos de sus componentes. En efecto, deberá verificarse la afectación, circunstancia que tomará en cuenta la autoridad administrativa, pues esta juega, un rol fundamental en los temas del medioambiente.

Por otro lado, la Ley Penal cuando trata el tema del medio ambiente, al momento de tutelarlo, lo vincula con otros tipos de conductas ilícitas, como por ejemplo el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones, entre otros, ello en razón que un mismo comportamiento ambiental causa otros delitos dando motivo a un concurso de los mismos por lo que a efectos de delimitarlo se deberá tener presente para su derivación respectiva y tratarse como un delito común; sin desviarnos que el bien jurídico protegido es el ecosistema.

Cuando hablamos de un delito ambiental, debemos pensar en aquella afectación que se suscita en el medio ambiente, y éste puede acarrear responsabilidad tanto en personas naturales como jurídicas; y en donde, efectivamente, la parte afectada recae en el sujeto pasivo, afectando el bienestar o en su defecto ecosistemas determinados en las que involucra a seres biótico y abióticos; es decir, en otras palabras, la colectiva, la misma que es defendida por el

Ministerio Público.

Por lo que, quien se sienta afectado debe obligatoriamente solicitar su incorporación en el proceso como parte civil, cuyo fin último es obtener una indemnización, mismas que será determinada finalmente en la sentencia; sin embargo, habría que preguntarnos quién o quiénes pueden solicitarlo; siempre que sea la autoridad cuyas funciones y competencias le otorgan esa facultad para solicitarla; además debe estar normada en nuestra legislación; sin que se pierda el objetivo para el cual se invoca, como es la reposición, conservación, preservación o en su defecto regresar a su estado primigenio, antes de la realización del delito de carácter ambiental.

Empero, el objetivo de las condenas impuestas son de índole provisorio, estos es, el inciso 22° del artículo 139° de la Carta Magna, misma que debe fijarse no solo en la resocialización, que haga que el involucrado recobre ciertos principios y valores que le permitan crecer en sociedad; así también, se buscará la reeducación; siempre y cuando, su desarrollo cognitivo se base en el respeto de los demás con conocimiento de las normas de convivencia y esta aplicadas en la sociedad; y por último, se hablará de rehabilitación, siempre y cuando se sienta un nuevo ser, cargado de emociones positivas y con la intención de aportar más que a restar con conductas indeseables. De modo, que en el Título sobre los Delitos Ambientales, las penas oscilan desde los cuatro años hasta los seis años y en sus formas agravadas hasta los diez años; por lo que aquellas personas que incurrir en delitos ambientales menores a los cuatro años podrán solicitarse pena suspendida.

En cuanto a las penas días multa, se deberá examinar si estas guardan coherencia con el bien jurídico tutelado y si con estas se mantiene la función represiva y provisorio, pues en

la gran parte de los casos los delincuentes tienen el dinero suficiente para efectivizar la cancelación respectiva, circunstancia que no genera ningún perjuicio a su economía menos aún algún efecto no representándole un perjuicio significativo en su dinero, o el efecto disuasorio para que no vuelva a delinquir.

Es importante señalar que, en estos tipos penal sobre delitos ambientales, se destaca el hecho que un funcionario o servidor público como producto de una sentencia se pueda declarar su imposibilidad para ejercer alguna función, profesión o cargo, el mismo que por el solo hecho de estar embestido de autoridad pretende darle un mal uso, contraviniendo o faltando gravemente a sus funciones señaladas o prescritas en la norma y de este modo comete un hecho sancionable por la ley.

En esa misma línea argumentativa, resulta necesario tratar el asunto sobre aquellas responsabilidades de índole penal que puede recaer en las personas jurídicas, que, si bien esta no tiene el dolo, haciendo alusión a las palabras latinas “societas delinquere non potest”; sin embargo, ésta sí puede ser pasible de otros tipos de sanciones o penalidades que nuestro derecho penal ha considerado que pueden ser posibles, tales como las clausuras de carácter temporal, liquidación o disolución de empresas, entre otras tantas, por lo tanto, así lo establece el artículo 102 de nuestra norma sustantiva.

Así tenemos que el artículo 314°-A, nos da a conocer la conducta penal que trasgreden los apoderados de las personas jurídicas y que son sancionados por los delitos estipulados y descritos en este título; y que los alcanza por el solo hecho de actuar como órgano autorizado de representación de una determinada empresa o sociedad; en condición de autor, autor mediato o inmediato o coautor (artículo 23° y 27° del Código Penal).

Por tanto, es necesario tener presente lo descrito en el artículo 12° de la Ley General de Sociedades, que hace referencia a la responsabilidad que ostentan desde que asumen el cargo los administradores o socios sobre sus actos, específicamente sobre los daños y/o afectaciones que se hayan suscitados como producto de su función, y que en la mayoría de los casos es producto de los acuerdos adoptados, por cuanto se extralimitan, atentando contra la buena fe del tercero.

El artículo 11° de nuestra norma adjetiva, en lo que respecta al apartado del Título Preliminar, hace referencia a que ningún ciudadano puede ser procesado ni sancionado más de una vez por el mismo hecho; claro está con la única condición de que se trate del mismo sujeto y fundamento; su aplicación puede darse tanto en el área administrativa, y principalmente, penal

El Derecho Penal prima sobre el Derecho de carácter Administrativo; ello no significa que uno sea más importante que el otro, por el contrario, toda responsabilidad administrativa que se sancione, es sin perjuicio que los referidos actos y tengan relevancia penal o civil, de ser el caso deberán enfrentarse su respectivo procesos dentro de estos fueros; tal como lo establece el artículo 138° de la LGA-Ley 28611; además tiene que ver sobre qué tipo de bien jurídico se está contemplando independientemente del tema civil o penal que fuere.

2.10. El bien jurídico en los delitos contra el medio ambiente

Que el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo del hombre ha sido reconocido a lo largo de la vida democrática de nuestro país, y que ha quedado plasmado en nuestra Carta Magna en el año 1979, en su artículo 123°; sin embargo, recobró grata vigencia en la del año 1993 (inc. 22 del artículo 2°), misma que tutela y garantiza el derecho al medioambiente (atmósfera, suelo, subsuelo, agua terrestres: ríos, mares, sub terrestres, entre otras incluida sobre las doscientas millas) y lo cataloga como un derecho de la tercera generación.

El Derecho penal constituye, como sabemos, un medio de control social secundario. El control social es, conforme precisa HURTADO POZO: el “conjunto de modelos culturales y de símbolos sociales y también de actos, a través de los cuales dichos símbolos y modelos son determinados y aplicados” (HURTADO POZO, J., 2012).

En función a su condición de medio de control social, el Derecho penal, cumpliendo una labor confirmadora y aseguradora de otros niveles de control social más sutiles (la familia, el colegio, el centro de labores, la iglesia, etc.) (MUÑOZ CONDE, F., 2010), pretende controlar, orientar y planear la vida en común. Es éste el motivo por el cual se determinan y definen ciertos comportamientos u omisiones como incorrectos, recurriéndose a la amenaza punitiva para que los ciudadanos omitan o ejecuten dichos actos. Al Estado le interesa pues orientar, a través del ejercicio del ius puniendi, el comportamiento de los individuos que lo integran (HURTADO POZO, J., 1996).

La respuesta estatal ante el comportamiento que se desvíe de su pretensión de control es la pena. La pena tiene siempre un contenido aflictivo, conforme fuera advertido por los autores del Proyecto Alternativo Alemán de 1966 al señalar que la sanción penal es una: “amarga necesidad en una sociedad de seres imperfectos como son los hombres”. Ante la evidencia constatada de que la actividad punitiva del Estado supone una de las más graves afectaciones de los derechos fundamentales de la persona (SERRANO-PIEDRECASAS FERNÁNDEZ, J., 2014), aparece la necesidad de fijar límites al poder punitivo estatal.

Es en ese contexto que aparece el concepto: “bien jurídico”, como criterio limitador de la intervención penal del Estado y que, haciendo propios los términos de SERRANO-PIEDRECASAS: “acota el círculo del ámbito legítimo de intervención”. Aunque éste no es el lugar más adecuado para estudiar las posturas existentes sobre el bien jurídico - penal ni su evolución histórica, creo preciso reafirmar la idea, ya expuesta por MIR PUIG hace una década (MIR PUIG, S., 2012), que el concepto bien jurídico no resulta suficiente para decidirse por la protección penal. Y esto es porque: “No todo bien jurídico requiere tutela penal, no todo bien jurídico ha de convertirse en un bien jurídico-penal”. Aparece así la necesidad de diferenciar ambos conceptos: bien jurídico y bien jurídico - penal.

El bien jurídico constituye el constructo basilar sobre el cual el Derecho penal asienta su legitimidad en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho; quiere decir, que la inclusión de los comportamientos “penalmente prohibidos” de relevancia jurídico penal deben tener como correlato un interés digno y merecedor de tutela penal, en el sentido de que la protección punitiva se alce como un imperativo categórico para asegurar

la subsistencia de los bienes jurídicos fundamentales. Nuestros catálogos penales, fieles a un orden filosófico humanista, comienzan el listado delictivo con aquellos injustos típicos que atentan contra los bienes jurídicos anclados en su núcleo más duro; verbigracia, delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, el honor, la familia, la libertad, etc.

La concepción descrita, devela una naturaleza “atomista” e “individual” de la caracterización dogmática que ha de guiar las formulaciones políticas criminales, que si bien pudo resultar una visión adecuada hace más de dos siglos con el emprendimiento del Derecho penal liberal, hoy en día, se muestra como obsoleta e inapropiada para conducir la política penal del tercer milenio.

La nueva descripción de las estructuras sociales, en base a una fastuosa redefinición de las actividades humanas, nos muestran una nueva cosmovisión del mundo que no puede ser dejado de lado por la ciencia jurídica, menos por el Derecho penal, concordante con una visión ius constitucional. La sociedad post industrial, apegada al auge significativo de la productividad empresarial, industrial, etc., da lugar a incidencias notables en la vida cotidiana de los mortales (PEÑA CABRERA, R., 1996). Basta salir a la calle para tropezarse con toda una gama de riesgos, de amenazas latentes para los intereses jurídicos fundamentales; peligros que no se perciben de forma material, según la concepción tradicional de los daños que se exteriorizan en la realidad, sino de forma casi imperceptible, pero con efectos poderosamente dañinos, que requieren ser neutralizados, controlados y prevenidos si es que realmente se quiere cautelar el futuro mismo de la humanidad.

La contaminación del medio ambiente es una de las amenazas más latentes, de mayor potencialidad perjudicial para la existencia de toda vida que se asienta en la tierra. El medio ambiente importa la plataforma esencial que coexiste con toda la humanidad, *conditio sine qua non* para la supervivencia de la raza humana, de la flora y de la fauna; un sistema que compromete al mundo actual y a las generaciones futuras; en palabras de SCHÜNEMANN, “la explotación indiscriminada de hoy significa la miseria de mañana” (SCHÜNEMANN, B., 2012).

Podemos sintetizar al objeto de protección jurídico-penal de la siguiente forma: “Aquel sistema, soporte fundamental sobre el cual han de desarrollarse adecuadamente todos los seres vivos que habitan sobre la tierra, es decir, un medio ambiente que con propiedad, pueda garantizar el desarrollo sostenible de toda existencia vital así como el de las próximas generaciones, de ahí que se consagre su valor constitucional” (BARRERO CÁCERES, 2005).

La protección del ambiente exige una concepción diacrónica calculada a largo plazo, que también incluya la garantía de condiciones humanas dignas para las próximas generaciones (TIEDEMANN K., 2012). Decir que el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalizado es afirmar la consagración al más alto rango de un valor que nuestra sociedad considera digno de protección y promoción, escribe JORDANO FRAGA. Desde un punto de vista práctico, el reconocimiento del bien jurídico significa la existencia de un grupo normativo destinado a garantizar su protección, pero también el carácter de principio

informador respecto al resto del ordenamiento jurídico (FRAGA.J., 2012).

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N°0048-2004/PI, ha sosteniendo lo siguiente: “El Tribunal Constitucional considera que el medio ambiente, entendido sistemáticamente como el conjunto de fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los organismos humanos, encuentra en el comportamiento humano una forma de acción y de creación que condiciona el presente y el futuro de la comunidad humana”.

Constituye un bien jurídico supraindividual, pues su titularidad no recae en una sola persona sino en el colectivo de la sociedad; es por ello, que puede hablarse en este caso de “intereses difusos”; es decir, de lo que se hallan presentes de “modo informal y propagado a nivel de masa en ciertos sectores de la sociedad”, cuya esencia toma lugar a partir de su directa relación con los bienes jurídicos individuales, al margen de que estos comportamientos prohibidos puedan ocasionar daños cuantificables a personas determinables. En estos casos, las repercusiones negativas del deterioro del medio ambiente afectan a la sociedad en su conjunto. Piénsese, por ejemplo, en la contaminación atmosférica, en la destrucción de un paisaje, en la desaparición de una especie protegida.

A decir de SCHÜNEMANN, tanto el verdadero interés de protección que se encuentra detrás del tipo penal como el bien de protección captado directamente por éste sólo pueden estar constituidos por los bienes ecológicos mismos. Sobre lo dicho, cabe anotar que la legitimidad del bien jurídico medio ambiente viene caracterizada por su estrecha vinculación con los bienes jurídicos de orden personal, es decir, la vida, el cuerpo y la salud

de las personas, pues las tipificaciones penales que el legislador ha glosado en el Título XIII del CP, responden a una idea reforzada y anticipada de la tutela de los intereses jurídicos personalísimos, en cuanto a una visión sistémica del estado de las cosas, como un bien jurídico en esencia funcional. La justificación axiológica no entiende que el medio ambiente, como bien jurídico, no cuente con autonomía sustantiva y procesal; todo lo contrario, son las propias particularidades y singularidades de este interés jurídico las que determinan una independencia reguladora, que se manifiesta en una penalización separada de los delitos que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud.

La protección necesaria del medio ambiente acaba a menudo en un menoscabo de los intereses de los individuos vivos quienes, por cierto, si son lesionados en su integridad física pueden adoptar por completo una función de representación del medio ambiente maltratado, pero el hecho de que conserven su integridad física no indica necesariamente también la integridad de los bienes jurídicos ecológicos (ESER, A., 2012).

A nuestro entender, las posibles afectaciones que pueda presentar el medio ambiente pueden perfectamente ser conciliables con aquellos daños que puedan aparecer en la integridad física de los individuos; sin embargo, la titularidad de la ofensa, en el primer caso, ha de recaer en la sociedad en su conjunto mientras que, en el segundo de los casos, en las mismas personas que son mermadas en la integridad de sus intereses fundamentales, mediando la tipificación de tipos penales distintos.

Sin embargo, la *lex lata* ha querido también recoger dichas lesiones, de conformidad con el contenido normativo previsto en los últimos párrafos del artículo 305 del CP; es decir, cuando por efecto de la contaminación se producen lesiones graves o la muerte de una persona. Según la postura de ESER, el alcance fundamental de la protección puede deducirse de dos factores: en primer lugar, de los objetos protegidos (la cuestión, en suma, de si junto a determinados bienes ambientales individuales se protege también todas las especies ambientales y, por último, aunque no en importancia, el ecosistema en su conjunto); de otra parte, de la intensidad de protección donde puede distinguirse entre el aseguramiento de la existencia de cada bien ambiental, el de su calidad y el de su incolumidad (ESER, A. 2012).

Cabe recalcar la visión “antropocéntrica” de la protección jurídica del medio ambiente donde los recursos naturales, así como la fauna silvestre y la lora (bosques) son materia de tutela legal en tanto son indispensables para la propia existencia del ser humano. Dicha declaración no obsta a reconocer que dichos recursos naturales, así como el desarrollo especialmente en el campo de la genética para la conservación de ciertas especies animales, puedan provocar una perspectiva distinta.

Se dice, entonces, que aparece también la conservación de la diversidad de especie a la luz de una nueva perspectiva, no sólo como potencial genético para “cultivos de resistencia” en el ámbito de la lora o con fines de lucha biológica antiparasitaria sino también de cara a la investigación en el campo de la tecnología genética, cuyas consecuencias no se nos alcanzan todavía plenamente. A partir de lo anotado, se dice en la doctrina que se asume una óptica ecocéntrica dejando de lado una visión estrictamente antropocéntrica, en la que

el objeto amparado por la norma trasciende de la vida y salud humanas para materializarse en los distintos elementos que integran el ambiente natural. La Ley General del Ambiente, en su artículo 2.3, dispone que debe entenderse, para los efectos de la presente Ley que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas, y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

Con respecto al segundo aspecto, cabe precisar que la intensidad de la protección jurídica del medio ambiente no puede ser percibida desde una visión sólo con respecto a un presente y de los seres vivos, sino de crear las condiciones necesarias y adecuadas para que las próximas generaciones puedan contar con una vida de calidad; no puede admitirse la idea de aprovechar los recursos naturales únicamente pensando en el presente, sin tomar ninguna medida de precaución en interés del hombre del mañana, del futuro. Sostuvimos que el objeto de interés no se reduce a evitar daños y estragos al ecosistema, a la biodiversidad y a la fauna, sino de articular las bases de un medio ambiente dígase de calidad.

Con ocasión de esta protección de la incolumidad tiene lugar también, de manera mediata, el aseguramiento de una cierta calidad existencial pues si en las áreas o regiones naturales protegidas, o través de la protección del agua, se aseguran determinadas condiciones de creación ambientales, también puede con ello facilitarse al mundo animal y vegetal una existencia en “nichos ecológicos” (ESER, A., 2012). Así, es de verse cuando el

legislador penaliza en el artículo 308, inciso d) la figura delictiva del “Tráfico Ilegal de Recursos Genéticos”, de especies de flora y fauna. El aseguramiento de la diversidad de especies es, además, importante para la conservación del equilibrio funcional (ESER, A. 2012). En resumidas, hemos de postular una protección penal de mayor intensidad, que haya de orientarse no sólo a la conservación y protección de un medio ambiente indispensable para el mantenimiento de la vida humana, sino también para asegurar un nivel óptimo de calidad de vida. Los delitos ambientales constituyen, por otro lado, auténticos tipos de peligro de la concreta colocación de un estado de riesgo al bien jurídico tutelado; construcciones dogmáticas, cuyo peligro en algunos casos puede ser contemplado desde una visión concreta y en otros desde un plano abstracto, inclusive de lesión (últimos párrafos del artículo 305 del CP). No obstante, es de verse también, que en algunos casos el legislador (Poder Ejecutivo) ha penalizado meras “contravenciones administrativas”, es decir, elevando a la categoría de norma penal, puras desobediencias administrativas, conforme se desprende de los artículos 311 y 312 del CP, en mérito a la sanción de la Ley N° 29263 de octubre del 2008 y del Decreto Legislativo N° 1084 de junio del 2008.

Ahora bien, el bien jurídico en esta titulación del corpus punitivo no presenta una homogeneidad absoluta, como sucede en otras parcelas de la criminalidad; como es de verse, cuando hablamos de los delitos ambientales, estos se agrupan en una serie de injustos típicos que vulneran específicos marcos del medio ambiente, con ello el sistema ecológico en sentido estricto así como los recursos naturales; este último a su vez comprende la fauna, la flora silvestre, las especies acuáticas, los recursos genéticos y los bosques, como se revela del contenido de los tipos legales correspondientes. El medio ambiente está compuesto por un

conjunto de elementos que, en la complejidad de sus relaciones, constituyen el marco, el medio y las condiciones de vida del hombre, apunta PEÑA CABRERA.

En ese sentido, los problemas del medio ambiente afectan a cuestiones tan diversas como los recursos naturales, los instrumentos de producción, los bienes y servicios, los residuos, la organización territorial de la sociedad. No se puede hablar, por tanto, de un solo bien jurídico sino de una serie de intereses jurídicos que han sido refundidos en una sola titulación de la codificación punitiva. Así, por ejemplo, la construcción en zonas destinadas a viales o bienes de dominio público constituye una grave infracción urbanística, más su realización no vulnera, en cambio, el medio ambiente natural.

2.11. Elementos constitutivos del delito contra el medio ambiente

Sujeto activo

La denominación de “el que”, nos induce a sostener que nos encontramos ante un delito común, donde el autor puede ser cualquier sujeto; sin embargo, dicho ilícito se ejecuta necesariamente como resultado de una actividad económica permanente, por haberse establecido en la normatividad administrativa valores límites, para la descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes; por lo que con dicho proceder resultan beneficiadas las personas jurídicas; asimismo, a la persona jurídica por dicho ilícito penal, se les aplica sanciones de carácter administrativas o civiles, como es la suspensión inmediata de la actividad contaminante,

clausura temporal o definitiva, así como otras medidas cautelares que correspondan.

Sujeto pasivo

En general, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado, pudiendo o no coincidir con el sujeto sobre el cual recae la acción típica, el mismo que vendría a ser el “Objeto de Derecho Protegido”; al respecto debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional desarrollando el tema de Medio Ambiente y Constitución Ecológica, ha precisado en la Sentencia N° 03343- 2007-AA, en el Fundamento 10) que la Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el plazo largo”. Siendo así, corresponde a las autoridades nacionales (presidente y sus ministros), no solo establecer la política ambiental nacional sino además, erigirse como defensor de nuestros recursos naturales, mismos que deben ser conservados, protegidos o reparados, a través de sus distintos niveles del Estado en todos sus estratos (regionales y locales).

Acción típica

En este caso de delito, el sujeto activo traduce su comportamiento al actuar con conocimiento (conciencia) y voluntad, repercutiendo en una acción, típica, antijurídica y culpable, la misma que se puede traducir sea en la emisión de gases tóxicos, ruidos, radiaciones, vertimiento o en su defecto filtraciones que afectan gravemente al medioambiente; dicho de otro modo, que estas acciones contaminen o en todo caso que exista la posibilidad de ocurrir

un perjuicio de tal magnitud que ponga en riesgo el bienestar de los seres que habitan este planeta y consiguientemente a sus componentes.

Formas culposas (segundo párrafo)

- Imprudencia: prima el deber de cuidado y de este modo lesionar a la norma de carácter ambiental.
- Negligencia: es omitir actuar en favor del medio ambiente y que producto de ello se cause una afectación.
- Impericia: Se da cuando carece de los conocimientos especializados de carácter ambiental, misma que repercuten en las normas por "Imprudencia" o "Negligencia".

El requerimiento del informe técnico

En los delitos ambientales es de pleno conocimiento jurídico que se trata de una ley penal en blanco, la misma que requiere del apoyo de otras entidades administrativas para determinar que una acción, por inaplicación de las normas de carácter ambiental, ocasionan una afectación al ecosistema; en tanto, que ello se traduce en la emisión de un Informe Fundamentado, el mismo que resulta ser exigible, tal como lo señala la Ley General de Ambiente en su artículo 149.1, por parte de los sectores o las llamadas Entidades Fiscalizables Ambientales para determinar qué o cuáles son esas normas trasgredidas.

Formas agravadas (Artículo 305 del Código Penal)

- Tiene que ver con dos aspectos; por un lado, los hechos que deben estar sustentados en falsedades o en su defecto en ocultamiento de información; y por otro, referido a obstaculizar o en el peor de los casos impedir la acción de fiscalizar.
- Accionar de manera oculto.
- Como efecto de las acciones contaminantes desplegadas por su actividad y que éstas producen graves afectaciones contaminantes o en su defecto la muerte.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

3.1. Presentación de los resultados

Se parte de la explicación de los datos obtenidos a través del examen minuciosos de las sentencias, que forma parte de la muestra de estudio. La información es presentada mediante tablas.

Es necesario recalcar que en esta investigación no se ha tomado en cuenta la construcción de gráficas, quedando totalmente facultativo la estructura del esquema presentado por la Escuela de Post Grado

Se precisa que en el presente trabajo no se ha considerado la elaboración de gráficas, por cuanto resulta facultativo según el esquema oficial de la Escuela de Post Grado, y por cuanto la cantidad de muestra con la que se trabajó resulta expresada con las tablas que presentamos.

Tabla N° 02. Delitos que con más frecuencia se presentan en los juzgados penales de Chiclayo

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Delitos de contaminación | -- | --- |
| Delitos contra los recursos naturales | 20 | 100 |
| TOTAL | 20 | 100 |

Año 2017

Origen del estudio: Poder Judicial

Los delitos ambientales que más se cometen en esta parte del país tienen que ver con atentar contra los recursos naturales, siendo el más frecuente el de depredación de flora y fauna silvestre, y tráfico ilegal de productos forestales maderables, todo esto en los veinte casos que hemos analizado.

Debemos destacar que en gran frecuencia se presenta tráfico de carbón, que como se obtiene de la depredación de la flora, y de la tala indiscriminada, para luego convertirlo en carbón y de cuyo comercio ilegal se obtendría ingente cantidad de dinero, pues dicho producto es distribuido en los grandes restaurantes de Lima.

Tabla N° 03: Sentencias condenatorias emitidas por los juzgados penales

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|------------------------|------------|------------|
| Sentencia condenatoria | 20 | 100 |
| Sentencia absolutoria | -- | -- |
| Total | 20 | 100 |

Año 2017

Fuente de investigación Poder Judicial

Todas las sentencias recogidas y analizadas son condenatorias. Todas las intervenciones realizadas con personas que se dedican al comercio ilegal de productos forestales devienen en intervenciones de la PNP en flagrancia delictiva, de tal forma que parece ser la única manera de identificar a los individuos que utilizan estas actividades como formas para ganar dinero, pero de manera ilícita. Sin embargo, de las lecturas de los casos pocas veces se identifican a los propietarios de los productos forestales, siempre quedan

comprendidos los choferes, o los terceros que son los dependientes de quienes son los que obtienen ganancias considerables, y explicando también las razones por las que en flagrancia se arriban a sentencias condenatorias.

Tabla N° 04. El informe como requisito de procedibilidad

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|--|------------|------------|
| Elaboración por un ingeniero | 20 | 100 |
| Elaboración por un profesional diferente | -- | -- |
| TOTAL | 20 | 100 |

Año 2017

Fuente de investigación Poder Judicial

También en todas estas ocasiones, encontramos que en la condena se ha pronunciado por la existencia de un Informe que de la autoridad administrativa que reporta que en la realidad exista una grave afectación grave daño al medio ambiente, y que causa perjuicio insubsanable al ecosistema. Dicho informe resulta fundamental para la procedencia del delito, como se expuso, por cuanto, la autoridad administrativa evalúa la magnitud del daño y lo que va a permitir establecer si es que estamos frente a una infracción administrativa o si la acción ilícita desplegada por el sujeto activo supone una acción delictiva.

Sin duda que estos informes, a pesar que no se reconoce, resultan fundamentales en la decisión jurisdiccional y en casi todos los casos son los que terminan decidiendo una condena o una absolución, pues el conocimiento técnico del daño ocasionado queda

supeditado a lo que el perito indique en el documento que remita al Fiscal Provincial Penal, durante la investigación preparatoria. Incluso podemos afirmar que la ausencia de este informe o una conclusión que no refiera grave daño ambiental, ha de originar que la acción penal resulte realmente inviable.

Tabla N° 05. Determinación del daño suficiente para incoar el delito

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|-------------------------|------------|------------|
| Se determina el daño | 20 | 100 |
| No se determina el daño | -- | -- |
| TOTAL | 20 | 100 |

Año 2017

Fuente de estudio: Poder Judicial

Sobre la lectura de las sentencias analizadas, conforme también ya se expuso todas refieren la concurrencia de un daño grave daño como consecuencia del accionar del agente, y tratan de explicarlo según la cantidad de árboles dañados, dejando claro en todos los casos que el grave daño ambiental no puede ser medido. Esto lo hemos recogido de la reseña que se hace en la sentencia condenatoria, aunque ya en la evaluación que hace el juez penal en casi todos los casos, no se analiza la pericia contenida en el informe y se prefiere aludir tan sólo a la conclusión arribada.

Tabla N° 06. Precisión del método para determinar el daño

| FRECUCENCIA ASPECTO | FRECUCENCIA | PORCENTAJE |
|------------------------|-------------|------------|
| Se precisa | -- | -- |
| No se precisa | 20 | 100 |
| TOTAL | 20 | 100 |

Año 2017

Origen: Poder Judicial

Toda pericia debe contener una metodología mínima que permita establecer la metodología utilizada para realizar un estudio pormenorizado que permita arribar a conclusiones sobre un hecho. Sin embargo, en el presente caso, en las sentencias condenatorias estudiadas no se expone de manera expresa cuál ha sido la metodología utilizada por el informante para poder determinar el daño originado con la conducta del agente. Esta omisión, que por cierto es relevante, sin embargo, no resulta cuestionada de forma alguna por la defensa técnica de los sentenciados, quienes con su aceptación denotan estar de acuerdo con la determinación del grave daño hecha por el perito y expuesta en el juicio oral

Tabla N° 07. Fundamento de valoración del daño

| FRECUCENCIA ASPECTO | FRECUCENCIA | PORCENTAJE |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Reincidencia administrativa | 10 | 50 |
| Afectación de especie de extinción | 12 | 60 |
| Beneficio económico | 14 | 70 |
| Otros | 10 | 50 |
| Total | 20 | 100 |

Año 2017

Origen de análisis: Poder Judicial

Tampoco la fundamentación del daño resulta clara y precisa, pues, a lo mucho, pues se entiende que la misma debe estar en relación al perjuicio ocasionado al bien tutelado; sin embargo en las sentencias estudiadas podemos leer que en los fallos judiciales estudiados hasta en catorce de los casos el daño ocasionado se sustenta en el beneficio económico que puedan obtener los agentes con el delito que se comete, y sin bien es cierto que esto resulta interesante desde un punto de vista de la indemnización que se debe determinar como parte de la reparación civil, lo cierto es que desatiende de manera expresa la reparación del daño, porque si ocasiono un grave daño con la extracción de una especie protegida, lo mínimo que pudo haberse indicado en las sentencias es la consignación de la manera cómo es que debió haberse resarcido el daño originado.

Tabla N° 08. Correlación daño – sanción penal

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|-----------------------|------------|------------|
| Existe correlación | -- | -- |
| Nada de correlación | 20 | 100 |
| Total | 20 | 100 |

Año 2017

Origen de análisis: Poder Judicial

Sin embargo, a pesar de establecerse, aunque de manera genérica y sin precisar la magnitud del daño, que el perjuicio ocasionado resulta ser grave, la sanción penal deviene en una condena suspendida en su ejecución; y si bien es cierto que tampoco estamos de acuerdo con petitionar una pena efectiva que confinaría en la cárcel al procesado, lo cierto es que consideramos que como parte de las reglas de conducta se puede ser más severo a fin de

garantizar se resarza el daño de manera efectiva y que se garantice además la toma de conciencia para evitar que esta forma de comportamientos delictivos sean abundantes y sigan aumentando.

Tabla N° 09. Correlación daño causado –reparación civil

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|-----------------------|------------|------------|
| Existe correlación | -- | -- |
| No existe correlación | 20 | 100 |
| Total | 20 | 100 |

Año 2017

Origen de análisis: Poder Judicial

Del mismo modo, tampoco existe co relación entre el grave daño causado, que ha sido determinado así en un pronunciamiento con condena y la suma de la reparación civil, de tal manera que los quinientos o nuevo mil nuevos soles son calculados en base a un razonamiento que hace el juez, sin considerar el grave daño no especificado por parte del Ministerio Público en su acusación. Claro está que este conocimiento especializado a veces resulta ser difícil de ser determinado tanto a nivel de acusación como en la propia resolución, sin embargo, consideramos que el perito especializado en elaborar el informe debe ser lo suficientemente específico para que se pueda fijar la dimensión del resarcimiento del daño.

Tabla N° 10. Profesional que elabora el informe

| FRECUENCIA ASPECTO | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
|--|------------|------------|
| Elaboración por un ingeniero | 20 | 100 |
| Elaboración por un profesional diferente | -- | -- |
| Total | 20 | 100 |

Año 2017

Fuente de investigación Poder Judicial

A pesar que el profesional que en todos los casos elabora resulta ser un ingeniero, sin embargo, consideramos que las instituciones públicas vinculadas con el cuidado del medio ambiente y que les corresponde tener la responsabilidad de elaborar el informe especial de determinación de daños ambientales, deben estar preparados para la valorización de daño y sobre todo para establecer elementos objetivos que permitan el resarcimiento del medio ambiente perjudicado con la acción delictiva. Esto ha de ser gran ayuda para con acciones reales desde el derecho penal, realmente se proceda a reparar el daño ocasionado.

3.2. Verificación de la Hipótesis

Lo planteado al comienzo del nuestro estudio, está referido con:

Si se establecen supuestos legales para medir la lesión del grave daño producido al ecosistema, entonces se podrá determinar la relevancia de la comisión de los delitos ambientales, casos judicializados en juzgados penales de Chiclayo años 2012-2015

De la revisión de la muestra que hemos analizado podemos establecer:

- Con los delitos ambientales se produce un grave daño al medio ambiente, específicamente al ecosistema, pues con actividades como la deforestación agresiva, la tala del sistema arbóreo, la depredación de la flora y fauna, se causa un gran perjuicio que el legislador peruano ha encargado resarcir mediante el derecho penal.
- Corresponde a los operadores del derecho proponer, considerar, evaluar y determinar la manera cómo se puede resarcir el daño ambiental, de tal manera que se debe resarcir el perjuicio ocasionado.
- El Informe especial que hace la autoridad administrativa para acreditar el daño ocasionado con el delito ambiental, si bien determina el perjuicio originado no queda claro en detalle cuál es la magnitud de la afectación al bien tutelado.
- Esto precisamente, tal y conforme se puede advertir en las sentencias condenatorias estudiadas, se hace una descripción de la acción penal, y de la misma se infiere la naturaleza del daño ocasionado sin que se precise pormenores, del mismo y esto en atención a que se necesita que se precise este aspecto por cuanto dicho daño, que debe ser para el caso objetivable, será el punto de partida para establecer una acción de resarcimiento.
- Entonces, no existen ni se recogen en la sentencia aspectos formales que permitan evaluar la validez del pronunciamiento de la autoridad administrativa, lo que por cierto no va a permitir medir con precisión cuál es la magnitud del daño infringido y orientar con ello la reparación civil a establecer.
- Consideramos que el daño al ecosistema producidos con la realización de los atentados al ambiente, muy bien pueden contrarrestarse con la realización de tareas como acciones de

reforestación, sembrado de árboles, crianza de animales en extinción, etc., de tal manera que con el poder coercitivo que tiene el derecho penal se pueda conseguir la realización específica de un trabajo orientada a restablecer el equilibrio ecológico.

- Esto supone entonces, que nuestra hipótesis de trabajo que nos hemos planteado, se verifica en cuanto a que establecidos los presupuestos técnicos que permitan restablecer el daño ocasionado, es probable que en las sentencias condenatorias se establezcan acciones orientadas a reparar el perjuicio ocasionado con los delitos cometidos por parte de los agentes delictivos.

3.3. Propuesta Legislativa como consecuencia de la realización del presente trabajo de investigación:

3.3.1. Base filosófica

En el derecho siempre se pregona el respeto a la norma establecida, la misma que al ser objetiva y expresada mediante leyes, tiene un alto contenido social, porque son las personas que las establecen y somos todos los individuos quienes debemos cumplirlas. Sin embargo, muchas de estas normas son incumplidas y los derechos son superpuestos, lo que origina que haya conflictos que se resuelven en casi todos los casos asumiendo el fallo que establezca un tercero imparcial.

Pero, en todo esto hay un orden en la naturaleza que debe respetarse y que lamentablemente no ocurre así, Dicho orden parte del equilibrio que existe entre los componentes de la misma, y se manifiesta a través de los ciclos vitales que permiten

la existencia de todos los seres que formamos parte de este mundo, de tal forma que cuando este respeto a las leyes naturales no existe, la naturaleza se niega a sí misma y arremete contra toda forma viviente.

No está demás señalar que dicho desequilibrio produce inundaciones, sequías, heladas, descongelamiento de los glaciares, envenenamiento de los ríos, etc., lo que origina que sea el hombre, conjuntamente con todas las especies vivientes quienes sufren las consecuencias.

Por esto, los diferentes estados han adoptado una serie de convenciones y aprobado una serie de normas buscando proteger el medio ambiente, e incluso muchos países como el Perú, han criminalizado las conductas penales. Sin embargo, el recurrir al derecho penal debe servir para evitar que los atentados contra el equilibrio ecológico deben cesar, precisamente a través del cumplimiento de conductas que conduzcan a elevar la conciencia ecológica de los ciudadanos, tan necesarios en este tiempo de calamidades y de catástrofes.

3.3.2. Base constitucional

La Carta Magna del Estado, manifiesta abiertamente su disposición de tutelar las riquezas naturales, así se prescribe:

Artículo 66.- Recursos Naturales Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Si bien es cierto se confiere al Estado la potestad para aprovechar los recursos naturales, lo que haría prevalecer un carácter económico a los recursos naturales, lo cierto dicho carácter patrimonial está supeditado la normatividad del Estado y a quien éste le concede la posibilidad real de administrarlos, en caso de particulares. De esta manera el Estado asume no sólo la conducción, supervisión, fiscalización y administración de las riquezas naturales, sino también que se responsabiliza de la fiscalización del uso responsable de dichos recursos naturales.

Resulta oportuno señalar lo establecido por el Tribunal Constitucional que señala que cuando se habla de “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida”, y está considerado como un derecho único e importante que se encuentra previsto en el inciso 22° del artículo de nuestra Carta Magna y ésta a la vez, sin perder de vista, lo indicado en el título preliminar del Código del Medio Ambiente, mismo que prevé: “[t]oda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente equilibrado, saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente (...). Le corresponde –al Estado– prevenir y controlar la contaminación ambiental” (Expediente 01848-2011-AA).

Precisa el máximo organismo constitucional que un Estado como el nuestro con corte democrático, el mismo que busca cuidar y prestar la garantía que el caso amerite, siempre respetando los derechos fundamentales, así como sus derechos que, en la perspectiva de persona humana, reflejando una actitud digna (artículo 1º de la Constitución), asimismo, debe ser tarea de todos conservar, proteger o reponer las áreas deforestadas (Expediente 01848-2011-AA).

Asimismo, se establece que todos tenemos ese deseo de vivir en un ambiente equilibrado y pertinente, mismo que refleja una obligación de índole *negativa* y otra, *positivo* frente al Estado. Se habla de un espacio *negativa*, *al traducirse* en una obligación del Estado de no realizar comportamientos que dañen el medio ambiente y de este modo afecten su equilibrio. Por otro lado, veremos que será *positiva*, al existir derechos y obligaciones obligadas a conservar el ambiente equilibrado, los cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades; lo cual supone tareas de conservación, mitigación o en su defecto reponerlo al estado original; debiendo en todo momento la prevención ante cualquier eventualidad del sino también de prevención ante afectaciones a ese ambiente equilibrado (Expediente 01848-2011-AA).

Es importante señalar que cuando se habla de delitos ambientales, se tiene que resaltar qué es lo que se tutela, cabría preguntarnos, y evidentemente, tal como lo describe la STC 0048-2004-PI/TC, además de indicar que es considerado como un derecho fundamental, plasmado en el inciso 22º del artículo 2º, se ponga de relevancia

que éste se basa en ese derecho que tiene toda persona de gozar en un ambiente equilibrado y que éste se preserve.(STC 0048-2004-PI/TC).

Asimismo, nuestra Constitución confiere al Estado la obligación de establecer la Política Ambiental, así:

Artículo 67.- Política Ambiental El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha establecido que el artículo 67° de la Carta Magna exige como política de Estado, elaborar una Política Nacional del Ambiente en la que cada uno de los sectores conformantes de éste incluyan en su labor ministerial aspectos de carácter ambiental que persigan como fin último no sólo la protección y conservación sino sobre todo la preservación del mismo y en todo caso la reparación de éste, lo que debe reflejarse en la definición una lucha frontal multisectorial contra los actos de tala, desertificación de nuestros bosques, contaminación de los suelos, aguas terrestres, subterráneas, marítimas, entre otras afectaciones ambientales, y en todo caso su tutela le es exigible al Estado, prevenirlo, controlarlo, supervisar y por último monitorearlo. (Exp 3510-2003 /AA).

Pero aún más, la Carta Magna establece también el deber del Estado Peruano y de todos los ciudadanos de procurar la conservación del medio ambiente, por ello más allá de la protección administrativa que se confiere al medio ambiente, resulta atinado que el Estado haya buscado también tutelar dicho bien jurídico, empleando el

derecho penal. La Constitución establece que:

Artículo 68.- Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Consecuentemente, existe un nuevo pronunciamiento, en el mismo sentido, sobre la preservación del medio ambiente y la obligación del Estado de enmarcar una política que lo tutele, ello con el único objetivo de velar por el bienestar del ciudadano y sobre el derecho fundamental a vivir y disfrutar de un ambiente equilibrado en donde sus componentes interactúen en forma armónica y responsable. (Expediente N° 0048-2004-PI/TC. Finalmente, considero que esta obligación conservacionista también involucra a los particulares, la misma que se encuentra reflejada en sus actividades económicas tales como la pesca, minería, industrial; entre otras, en donde se pone en riesgo nuestro medio ambiente, y del cual la normatividad vigente si bien existen parámetros para definir cuando estamos ante un atentado contra el medio ambiente, también es que nuestros actos deben estar guiados por el principio de responsabilidad ambiental, el mismo que se encuentra descrito y consagrado en el artículo IX del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente. (Exp 3510-2003 /AA).

3.3.3. Propuesta penal

Se ha venido exponiendo que como parte de la reparación del daño debe procurarse que la lesión al bien jurídico tutelado sea resarcido, y para ello consideramos que no en todos los casos debe imponerse una pena privativa de la

libertad efectiva, es decir, confinar a lo reos en cárceles, por cuanto al ser las reparaciones civiles diminutas, tampoco les costaría trabajo en cancelarlas o simplemente no interesaría que se cancelen las mismas.

Por esta razón, señalamos que, en los casos de condenas penales con suspensión de la pena, se debe considerar la imposición de acciones que vayan directamente a contrarrestar el daño ocasionado, de tal manera que se pueda imponer reglas de conductas orientadas a que el condenado realice tareas de reforestación, de plantación de árboles, etc., como una forma de resarcir el daño ocasionado. Así, proponemos se modifique:

"Artículo 58. Reglas de conducta

Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que sean aplicables al caso:

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;
2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez;
3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;
4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo;
5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;
6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol;

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente; o,
8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten contra la dignidad del condenado.
9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Y consideramos se debe incorporar una regla más de conducta, orientada precisamente a que el sentenciado realice tareas que estén orientadas a reparar el daño ocasionado:
10. En el caso de delitos ambientales, se impondrá como regla de conducta la realización de tareas orientadas a reparar el daño ocasionado, debiendo la autoridad administrativa ambiental y el propio sentenciado informar mensualmente sobre tareas de: reforestación, limpieza de cauces, plantación y cuidado de árboles, o las acciones que correspondan.

CONCLUSIONES

1. La obligación de establecer si estamos frente a un delito ambiental se concretiza a través de la elaboración de un informe especializado elaborado por la autoridad administrativa correspondiente, debiendo establecerse además del grave daño ocasionado al medio ambiente, los siguientes aspectos: objeto del informe, metodología empleada para determinar el daño, detalle de la lesión al bien jurídico, acciones de reparación del perjuicio originado, esto para determinar las reglas de conductas frente a una sentencia condenatoria con pena suspendida.
2. El grave daño ambiental es aquel que se causa al equilibrio ecológico, mediante una acción prevista en la ley penal de manera genérica y desarrollada mediante una ley administrativa, y que le debe servir al funcionario público para determinar los pormenores de la lesión originada, pudiendo la misma repercutir en la afectación del aire y cauces naturales y de servicio, atentados contra la flora y fauna de protección así declaradas, utilización de residuos contaminantes por actos de extracción de minería ilegal, entre otros.
3. Los delitos medioambientales es producto de un tema a tratar de manera urgente y responsable a fin de tipificar y tutelar los bienes jurídicos que garantizan a las personas el derecho a vivir en un ambiente equilibrado para su desarrollo, de tal forma que nadie atente se manera cruenta contra el equilibrio ecológico, tan necesario para la vida humana. Son delitos con normas penales en blanco, es decir, que necesitan de una norma administrativa que los precise y los determine, y esto se debe en la necesidad de atender los diferentes ámbitos de protección que abarca la geografía nacional, protección que varía de acuerdo al

lugar y área en el que nos encontremos.

4. En los pronunciamientos jurisdiccionales analizados, podemos notar que los órganos jurisdiccionales locales ponen énfasis en los elementos puramente penales, sin llegar a establecer con solvencia la forma como se ha lesionado el bien jurídico protegido, pero tampoco interesa cómo se llega a determinar la dimensión de dicha lesión. Este es un hecho recurrente en todos los casos analizados, sin que se contribuya por cierto a crear conciencia sobre la necesidad de fomentar de reparar el daño ocasionado con acciones irresponsables y delictivas.
5. Por esta razón, proponemos que en los casos en los que se dicte sentencia condenatoria pero con pena suspendida, se debe buscar establecer como reglas de conducta la reparación del daño ocasionado, y esto que puede parecer difícil de lograr no lo es en la medida en la que el perjuicio realizado va a depender de la condiciones económicas de quien lo hace, pues debe considerarse quien daña más es que puede hacerlo, y si esto es así, está en condiciones de poder reparar el daño que ha originado.
6. Por ello se propone, modificar el artículo 58 del Código Penal vigente y que se consigne como regla de conducta para los hechos considerados como atentados al medio ambiente que el sentenciado repare el daño ocasionado, estableciéndose la obligación de sembrar árboles, limpiar cauces, descontaminar de ruidos molestos las calles, acciones de reforestación, etc., buscando que la conducta negativa sea reducida a su mínima expresión con la realización de actos en los que se busque se tome conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente.

RECOMENDACIONES

1. Promover en nuestra Universidad, en todos sus programas en el rubro del Derecho, el debate de tópicos relacionados al derecho ambiental, y su repercusión con la parte especial del derecho, ello en razón que el equilibrio ecológico resulta ser un imperativo que hay que defender, proteger y tutelar más que como un elemento normativo, fundamentalmente como un tema de conciencia ciudadana.
2. Fomentar en las autoridades administrativas la necesidad de emitir normas de dicha naturaleza orientadas a establecer las normas administrativas que permitan tener los instrumentos legales que llenen los vacíos de las normas penales en blancos y así poder operativizarlas y aplicarlas en los casos que se presenten.
3. En el tema de las condenas penales con pena suspendida, se debe considerar la imposición de acciones que vayan directamente a contrarrestar el daño ocasionado, de tal manera que se pueda imponer reglas de conductas orientadas a que el condenado realice tareas de reforestación, de plantación de árboles, etc., como una forma de resarcir el daño ocasionado. Así, proponemos se modifique:

"Artículo 58. Reglas de conducta

(...) **10.** En el caso de delitos ambientales, se impondrá como regla de conducta la realización de tareas orientadas a reparar el daño ocasionado, debiendo la autoridad administrativa ambiental y el propio sentenciado informar mensualmente sobre tareas de: reforestación, limpieza de cauces, plantación y cuidado de árboles, o las acciones que correspondan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Briceño, M. (2004). "El daño ecológico. Presupuestos para su definición", artículo presentado en el V Congreso de Derecho Ambiental Español
- Briceño Ch., A.M. (2009). "Aproximación a los conceptos de daño ecológico y daño ambiental. Dos daños en un mismo esquema de responsabilidad", en Daño Ambiental, Tomo II, Bogotá, Universidad Externado de Colombia
- Carmona L., M. D. C. (2001). "El derecho ecológico en México", en Soberanes Fernández, José Luis (Compilador), Tendencias Actuales del Derecho, 2a ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas, México DF.
- De Vicente M., R. (2002). Una aproximación a la protección penal del medio ambiente en Perú". En Revista peruana de Ciencias Penales. N° 11, Año VII – VIII – Idemsa – Lima Perú.
- De La Gándara V., B. (1998). En Bacigalupo, Enrique. Curso de Derecho Penal económico. Madrid.
- Galdós, J.M. (s. año). "Derecho ambiental y daño moral colectivo, algunas aproximaciones"
- Gómez-Orea, D. (1994). "Evaluación de Impacto Ambiental". Editorial Agrícola Española S.A., España.
- Gutiérrez S., J. (2008). "La Contaminación del Aire por Emisiones Gaseosas y su regulación en el

- Perú", en Revista Peruana de Derecho de la Empresa, N° 65.
- González, R. (2001). "Recomendaciones para la caracterización del daño ambiental" en Temas de Derecho Ambiental, Editorial Investigaciones Jurídicas.
- Grupo de Trabajo Multisectorial para la preparación del Ministerio del Ambiente, (2008), Documentos finales presentados a la PCM.
- García R., N., (1996). El Poder Punitivo en el Estado Democrático, pág. 25-26, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca.
- Loperena R., Demetrio, El derecho al medio ambiente adecuado,
- Lorenzetti, R.L. (1996). "Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos". "Daño ambiental colectivo: su reconocimiento jurisprudencial"
- Macías, L. F., (2009). "El Daño Ambiental. Hacia una reflexión conceptual desde la filosofía y el Derecho Ambiental", en Daño Ambiental, Tomo II, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
- Manavella, C. (2000). "Responsabilidad Civil Ambiental", recopilación contenida en el texto base del curso Responsabilidad Civil Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional, Costa Rica.

Martín M., R. (2003). "Valoración de los Daños Ambientales", en Revista de Derecho ambiental de la Universidad de Chile, N° 01, Año I.

Muñoz C., F. (1999). Derecho Penal /Parte Especial. Editorial Tirant III Blanch. Valencia- España.

Muñoz C., F. (s. año). Derecho Penal y Control Social (sobre la función motivadora de la norma jurídica penal)

Paredes C., M. (2008). "Los Residuos Peligrosos y su Regulación en el Derecho Internacional del Medio Ambiente", en Revista Peruana de Derecho de la Empresa, N° 65.

Peña C. F., A. (2011). Los Delitos contra el Medio Ambiente. Editorial Rodhas SAC.

Pulgar V., M. (2003). Manual de Legislación Ambiental. SPDA. Lima.

Reátegui S., J. (2006). La Contaminación Ambiental como Delito: Aspectos Sustantivos y Procesales, Lima, Jurista Editores.

Real, G. (s. año). "El Derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad", en Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, México, PNUMA/OR- PALC

Roy V., P. (s. año). "En busca del Derecho Ambiental (I)"

San Martín V., D. (2015). El daño ambiental, Editorial GRILEY, Lima Perú.

Serrano G., A. (s. año). Derecho Penal / Parte Especial, 9º edición. Ediciones Dykinson. Madrid

Serrano- Pie De Casas F., J. (s. año). Conocimiento Científico y Fundamentos del Derecho Penal,
anotaciones de Derecho peruano por el prof. Carlos Caro

Tiedemann, K. (s. año). “El Derecho Penal Ambiental Alemán en su contexto Europeo y Mundial”.
En: Derecho Penal y nuevas formas de Criminalidad.

Vives A., T. (1995). En Comentarios al Código Penal de 1995. Volumen II, Valencia – España.

DECLARACIONES:

Declaración de Estocolmo de 1972. Primer considerando.

Declaración de Estocolmo de 1972. Segundo considerando.

Sentencia extraída del libro “Jurisprudencia Ambiental” del autor Mario Valls, Ugerman Editor,
2000, Argentina

Expediente 01848-2011-AA

STC 0048-2004-PI/TC

Exp 3510-2003 /AA

LINKOGRAFÍAS:

"Desarrollo Sostenible" [En línea] < www.pucp.edu.pe/idea/docs/m5.pdf

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española. [En línea], < [http:// www.rae.es](http://www.rae.es)>

Vega, E., “Evaluación Económica del daño ambiental causado por incendios forestales en Costa Rica”, documento extraído de la red mundial de la información, www.fire.uni.freiburg.de/GlobalNetworks/Panamerica/Oct%2004%20Network%20Meeting/PAWFCNet-04-Vega-Barrantes-Paper-Paper-22-Oct-2004.p

https://www.earthrights.org/sites/default/files/documents/training-for-lawyers-7_0.pdf

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf.xxxxxxx

Constancia de originalidad



ANEXO 01


CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández**, Asesor de tesis¹, revisor del trabajo de investigación del tesista: **JAIME DAVID GONZÁLEZ MORALES**.

Titulada: "MEDICIÓN DE LA LESIÓN DEL GRAVE DAÑO AL ECOSISTEMA Y LA COMISIÓN DE DELITOS AMBIENTALES, CASOS JUDICIAUZADOS EN JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑOS 2012-2015". luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 13 % verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 25 de agosto del 2023.



Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández
DNI: 16667328
ASESOR

Se adjunta:
Resumen del Reporte (Con porcentaje y parámetros de configuración)
Recibo digital.

Informe final de tesis




MEDICIÓN DE LA LESIÓN DEL GRAVE DAÑO AL ECOSISTEMA Y
LA COMISIÓN DE DELITOS AMBIENTALES, CASOS
JUDICIALIZADOS EN JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑOS
2012-2015.

INFORME DE ORIGINALIDAD


| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 13% | 14% | 4% | 7% |
| INDICE DE SIMILITUD | FUENTES DE INTERNET | PUBLICACIONES | TRABAJOS DEL ESTUDIANTE |

FUENTES PRIMARIAS

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | hdl.handle.net Fuente de Internet | 2% |
| 2 | dspace.unitru.edu.pe Fuente de Internet | 2% |
| 3 | Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante | 2% |
| 4 | mafiadoc.com Fuente de Internet | 1% |
| 5 | blog.pucp.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 6 | Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante | 1% |
| 7 | www.travimus.com Fuente de Internet | 1% |


 Leopoldo Yzquierdo Hernandez
 DNI 16667328
 ASESOR

| | | |
|----|--|------|
| 8 | dg5vd3ocj3r4t.cloudfront.net | 1 % |
| 9 | idoc.pub | <1 % |
| 10 | renati.sunedu.gob.pe | <1 % |
| 11 | repositorio.unp.edu.pe | <1 % |
| 12 | www.dspace.uce.edu.ec | <1 % |
| 13 | www.slideshare.net | <1 % |
| 14 | repositorio.udch.edu.pe | <1 % |
| 15 | perso.unifr.ch | <1 % |
| 16 | qdoc.tips | <1 % |
| 17 | Submitted to Universidad Cesar Vallejo | <1 % |
| 18 | www.scribd.com | <1 % |
| 19 | repositorio.unasam.edu.pe | <1 % |


 Leopoldo Yzquierdo Hernandez
 DNI 16667328
 ASESOR

| | | |
|----|---|------|
| 20 | tesis.ucsm.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 21 | www.cedpe.com Fuente de Internet | <1 % |
| 22 | 1library.co Fuente de Internet | <1 % |
| 23 | e-catalog.nlb.by Fuente de Internet | <1 % |
| 24 | www.limaeste.gob.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 25 | derecho.usmp.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 26 | repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 27 | repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 28 | escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr Fuente de Internet | <1 % |
| 29 | repositorio.uigv.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 30 | Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Trabajo del estudiante | <1 % |
| 31 | manglar.uninorte.edu.co Fuente de Internet | |


 Leopoldo Yzquierdo Hernandez
 DNI 16667328
 ASESOR

| | | |
|----|--|------|
| | | <1 % |
| 32 | repositorio.unal.edu.co Fuente de Internet | <1 % |
| 33 | repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 34 | ANDDES ASOCIADOS S.A.C.. "Tercera Modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Acumulación Condestable- IGA0009595", R.D. N° 229-2017-MEM-DGAAM, 2020 Publicación | <1 % |
| 35 | doku.pub Fuente de Internet | <1 % |
| 36 | www.pj.gob.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 37 | www.temasambientales.com Fuente de Internet | <1 % |
| 38 | repositorio.ulima.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |
| 39 | repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet | <1 % |


Leopoldo Yzquierdo Hernandez
DNI 16667328
ASESOR

Recibo digital



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

| | |
|------------------------------|--|
| Autor de la entrega: | Jaime David González Morales |
| Título del ejercicio: | TESIS 2 |
| Título de la entrega: | MEDICIÓN DE LA LESIÓN DEL GRAVE DAÑO AL ECOSISTEMA ... |
| Nombre del archivo: | TESIS_MAESTRIA_FINAL_1_1.odt |
| Tamaño del archivo: | 166.11K |
| Total páginas: | 93 |
| Total de palabras: | 26,619 |
| Total de caracteres: | 143,544 |
| Fecha de entrega: | 25-ago.-2023 10:33a. m. (UTC-0500) |
| Identificador de la entre... | 2151228485 |

